

INFORME 2014 DE REPÚBLICA DOMINICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

RESUMEN EJECUTIVO

La República Dominicana es una democracia representativa y constitucional. En Mayo del 2012 los votantes eligieron a Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como presidente por un período de cuatro años. Observadores internacionales imparciales evaluaron estas elecciones como generalmente libres y ordenadas a pesar de algunas irregularidades, incluyendo alegatos de fraude electoral, acceso desigual a los medios de comunicación, e insuficiencias en el marco legal que regula el uso de los recursos públicos y el financiamiento de campañas. Las autoridades a veces no logaron mantener un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad.

El problema más grave en términos de derechos humanos fue la discriminación contra inmigrantes haitianos y sus descendientes, incluyendo el fallo emitido en Septiembre del 2013 por el Tribunal Constitucional en el sentido de que los descendientes de individuos considerados como residentes ilegales en el país, de los cuales la mayoría son de ascendencia haitiana, no tenían derecho a la nacionalidad dominicana.

Otros problemas de derechos humanos incluyeron las ejecuciones extrajudiciales por miembros de las fuerzas de seguridad; condiciones carcelarias de hacinamiento y peligrosamente deficientes (*sub-estándar*); arresto y detención arbitraria; detención preventiva excesivamente larga; debilidad del estado de derecho; impunidad ante la corrupción; violencia crónica contra la mujer, incluyendo abuso familiar, violación, y feminicidio; tráfico y trata de personas; discriminación contra personas por su orientación sexual o identidad de género; y la aplicación inadecuada de las leyes laborales.

A pesar de que el gobierno tomó medidas para castigar a los oficiales que cometieron abusos, existe una percepción generalizada de impunidad oficial, sobre todo respecto a los oficiales de mayor rango.

Sección 1. Respeto a la Integridad de la Persona, Incluyendo la Libertad de:

a. Privación Arbitraria o Ilegal de Vida

Ni el gobierno ni sus agentes cometieron ejecuciones por motivos políticos; sin embargo, hubo reportes de que las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en ejecuciones ilegales, injustificadas o donde hubo uso excesivo de la fuerza.

Las estadísticas sobre las ejecuciones cometidas por la policía varían, pero la información reportada dió cuenta de la existencia de un problema persistente. La Policía Nacional reportó que hasta septiembre unas 136 personas habían muerto en enfrentamientos con la policía. Según las últimas cifras disponibles, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC), una organización no-gubernamental (ONG), estimaba en 155 el número de personas que hasta septiembre habían muerto en enfrentamientos con la policía, y en algunos casos alegaban el uso ilegal o excesivo de la fuerza por parte de los policías. La metodología utilizada para llegar a esa

cifra es confusa. Las ONGs de derechos humanos alegaron que, igual que en años anteriores, la policía usaba fuerza letal indebida y/o ilegal contra algunos criminales sospechosos de haber cometido crímenes.

La policía operó en un ambiente peligroso: la tenencia de armas de fuego es generalizada, y la tasa de homicidios alta, sobre todo en zonas urbanas. El Departamento de Información y Estadísticas de la Policía Nacional reportó 1,212 asesinatos ocurridos hasta agosto, la cifra más baja en 10 años para ese período. La policía siguió justificando el uso de fuerza letal como respuesta apropiada a los disparos hechos por los criminales sospechosos. Según el Departamento de Información y Estadísticas de la Policía Nacional, unos 33 miembros de la policía murieron en el cumplimiento del deber hasta septiembre. A pesar de que la policía defendió su conducta, informes de Amnistía Internacional (AI) y las ONGs indicaron un aumento en el número de incidentes donde los policías recurrieron al uso desproporcionado de fuerza ante la amenaza que confrontaban.

El 26 de Mayo la Segundo Teniente Mercedes Carmen Torres, durante su primer mes de servicio en la fuerza de la Autoridad Metropolitana de Transporte, fue herida de bala y asesinada por dos hombres, supuestamente para robarle su arma de fuego oficial mientras ella dirigía el tránsito. Oficiales de la Policía Nacional balearon y mataron a los dos hombres acusados del asesinato: Walder Sánchez, de 15 años, murió el 30 de Mayo, y Juan de la Cruz Adames, de 21 años de edad, murió el 31 de Mayo. Se alega que los oficiales hirieron a Sánchez varias veces; según la novia de Sánchez, éste no estaba armado. El Procurador General Francisco Domínguez Brito el 1 de Junio ordenó la investigación de todas las muertes. La investigación seguía en proceso en diciembre.

El 4 de Febrero la Primera Corte del Distrito Nacional declaró al Cabo Jairón Ramón Medrano Germosén culpable del asesinato en el año 2012 del estudiante de medicina William Florián Ramírez, y lo sentenció a ocho años de prisión.

b. Desapariciones

No se reportaron nuevos casos de desapariciones por motivos políticos.

c. Tortura y otro Trato o Castigo Cruel, Inhumano o Degradante

Aún cuando la ley prohíbe la tortura, el golpeo y el abuso físico de detenidos y presos, hubo casos donde los miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente la policía, según informes realizaban tales prácticas. La Procuraduría General de la República informó que miembros de la policía estuvieron involucrados en incidentes que resultaron en la mutilación o lesión grave de civiles desarmados. AI reportó el uso de choques eléctricos durante la interrogación de sospechosos.

La ley dispone castigos por tortura y abuso físico, incluyendo condenas de 10 a 15 años de prisión. Los fiscales a veces presentaron cargos contra policías y oficiales militares, alegando el abuso físico y crímenes asociados. Con frecuencia las autoridades enviaron casos de abuso físico a tribunales civiles penales, sobre todo después de la abolición de tribunales separados

para policías y militares. Los miembros de las fuerzas de seguridad manejaron a lo interno algunos casos de abuso y, según algunas ONGs, muchos casos de abusos de los derechos humanos permanecieron impunes.

La NHRC reportó que la policía seguía utilizando diversas formas de abuso físico y mental para obtener confesiones de parte de sospechosos detenidos. Según ONGs y medios de comunicación locales, oficiales de seguridad maltrataban a civiles, detenidos, presos e inmigrantes. Según la NHRC, los métodos abusivos utilizados para obtener las confesiones incluían meter la cabeza del detenido en una bolsa plástica, golpearlo a palos, obligarlo a permanecer parado durante toda la noche sin poder sentarse, y golpearlo con guantes o lienzos en los oídos para no dejar marcas. Ex-presos le informaron a la NHRC que fueron esposados y colgados de barras o clavos con las esposas, y que les golpeaban cuando intentaban pararse en el piso. Otros abusos reportados incluyeron casos de deportaciones ilegales, trato degradante de presos, y redadas en masa que se aprovechaban como oportunidades de extorsión. La mayoría de los casos de tratamiento cruel e inhumano involucraron a inmigrantes haitianos indocumentados en los barrios marginados urbanos así como a todo lo largo de la frontera con Haití.

Oficiales superiores de la policía trataron con seriedad la prohibición al abuso físico y al tratamiento inhumano, pero la falta de supervisión y capacitación en la mayor parte del personal de la fuerza pública y sistemas correccionales socavan los esfuerzos por corregir el problema.

Las autoridades asignaron a abogados de la Procuraduría Fiscal Nacional para monitorear el proceso investigativo para garantizar el respeto a los derechos de los detenidos en destacamentos policiales de alto volumen, y en varias oficinas de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). La NHRC informó que hasta septiembre ningún oficial de la policía había asistido a sus cursos de capacitación sobre derechos humanos. La NHRC informó que siguen brindando el curso a la policía.

Condiciones en los Centros de Prisión y Detención

Las condiciones carcelarias en las prisiones tradicionales varían desde justas a extremadamente duras. Amenazas a la vida y a la salud incluyen enfermedades transmisibles, insalubridad, falta de acceso a servicios de salud, falta de guardias de prisión bien capacitados, y el trato brutal entre internos. Estos problemas fueron agravados por hacinamiento severo, dificultades en la contratación de personal adecuado en las prisiones debido al riesgo de contraer enfermedades infecciosas, y una falta de capacidad para separar de la población general a decenas de miles de presos preventivos y condenados con enfermedades transmisibles.

A diferencia de las cárceles tradicionales, las cárceles modelo eran manejadas en su totalidad por guardias civiles entrenados; no estaban sobrepobladas; a cada interno se le dió una cama, una ducha adecuada, y facilidades sanitarias; y en general cumplieron los requerimientos nutricionales básicos de los internos. En las cárceles tradicionales un director de cárcel que se reportaba con el procurador general era técnicamente el responsable del manejo de cada cárcel, pero oficiales de la policía u oficiales militares, nombrados, en general, por un período de sólo tres a seis meses y responsables de la seguridad por lo general estaban a cargo. Según la Dirección de Prisiones, personal militar y policial custodiaban las cárceles tradicionales,

mientras que un cuerpo capacitado de guardias civiles brindaban seguridad en las nuevas “cárceles modelo” conocidas como centros correccionales y de rehabilitación (CRCs).

Condiciones Físicas: Para Agosto había 26,664 presos en 38 cárceles, con una capacidad global prevista de 14,321. De las 38 cárceles, 19 eran facilidades tradicionales, 18 eran CRCs, y una prisión albergaba a menores de edad. Además, había cinco palacios de justicia para albergar a detenidos preventivos. Los CRCs estaban llenos a plena capacidad con 8,871 presos. Virtualmente todas las cárceles tradicionales y centros de detención estaban sobrepoblados; los CRCs operaban a niveles cercanos a su capacidad. Por ejemplo, la cárcel de la Victoria, la cárcel más grande y de mayores niveles de hacinamiento en el país, tenía 8,526 presos en unas facilidades diseñadas para menos de 2,011 presos. La cárcel de hombres de Najayo, la segunda más grande del país, fue construida para 950 presos, y tenía a más de 1,785 presos.

Todas las cárceles tradicionales estaban segregadas por género, con la excepción de la cárcel de La Romana. Los internos en los CRCs todos estaban separados por género, y había estructuras construidas separadas en las cárceles de Najayo, Baní y Rafey para las mujeres. Para Agosto había aproximadamente 693 mujeres internas. Miembros de la policía y antiguos militares condenados por actividades delictivas fueron retenidos en secciones especiales de las cárceles o los palacios de justicia. Sin embargo, los presos preventivos y los enfermos no estaban separados de los demás. Todas las prisiones contaban con enfermerías, pero la mayoría de éstas no cumplían con las necesidades de la población carcelaria. En las cárceles tradicionales los internos deben comprar sus propios medicamentos a menos que la enfermería cuente con inventarios donados.

El hacinamiento y las enfermedades transmisibles constituyen problemas graves. La mayoría de las muertes reportadas estuvieron relacionadas con enfermedades, incluyendo la tuberculosis y el VIH/SIDA. Según la Dirección de Prisiones, al 7 de Agosto unos 45 presos se habían muerto en facilidades correccionales. Ninguna muerte fue atribuida a abusos por parte de los guardias de la cárcel.

Las condiciones sanitarias y de salud en general eran pobres, y en sentido general las prisiones no brindaban un cuidado médico adecuado a los presos. Era común que los presos durmieran en el piso ya que carecían de camas. Muchas veces las facilidades sanitarias y de aseo fueron inadecuadas. Más de 65 internos en la cárcel tradicional de Najayo compartían una ducha y un inodoro. La frecuencia de enfermedades entre los internos seguía aumentando debido al hacinamiento. Las enfermedades comunes incluyen el catarro/resfriado, la gripe, la bronquitis, infecciones respiratorias, enfermedades intestinales, gastroenteritis, infecciones de la piel, parásitos, tuberculosis, hepatitis, diabetes, hipertensión y VIH/SIDA. Según la Dirección para el Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH/SIDA, el 9 por ciento de la población carcelaria era VIH/SIDA-positiva. Aproximadamente el 5 por ciento de la población carcelaria estaba registrada oficialmente como VIH/SIDA-positiva. La Dirección de Prisiones reportó que todas las cárceles del sistema brindaban tratamiento y servicios de atención *in situ* al VIH/SIDA, pero el ombudsman de prisiones (defensor de los presos en las cárceles) reportó que solamente los CRCs contaban con tratamiento y servicios de atención *in situ* adecuados para VIH/SIDA. Los presos muchas veces pagaban sus propios medicamentos.

Según el ombudsman de prisiones, la mayoría de los 18 CRCs albergaban a personas con VIH/SIDA, y todos brindaban los servicios de tratamiento y atención al VIH/SIDA. Los internos de las cárceles modelo que tenían casos graves de VIH/SIDA o enfermedades terminales eran trasladados temporalmente a hospitales, y muchas veces se beneficiaban de solicitudes para modificar sus penas por el arresto domiciliario.

Según el director general de prisiones, los internos recibían tres comida por día, pero muchos en las cárceles tradicionales, según se informa, compraban comida a personas en los alrededores de la cárcel, la obtenían a través de parientes, o recurrían a mendigar. En dos cárceles los presos reportaron que la cantidad de comida era suficiente, pero baja en calidad. La NHRC reportó que en algunas cárceles tradicionales no había suficiente comida ni agua potable para cumplir las necesidades de los internos.

Eran comunes los reportes de maltrato y violencia en las cárceles, al igual que los reportes de hostigamiento, extorsión, y registro inadecuado a los visitantes.

Algunas cárceles quedaron efectivamente fuera del control de las autoridades, y existen alegatos de tráfico de drogas y armas, prostitución, y abuso sexual dentro de las mismas. Un sentimiento común entre los carceleros de las prisiones tradicionales era que, a pesar de que éstos pueden controlar el perímetro, muchas veces los presos controlan el interior con sus propias reglas y sistema de justicia. Esta situación en general se contrasta con la de los CRCs, donde los guardianes civiles mantienen el control de las áreas carcelarias.

El 28 de mayo José Paulino Ovidio Ficart, quien guardaba prisión en la cárcel de La Victoria, supuestamente estranguló a su compañera, María del Carmen Henríquez Bocio, cuando ésta lo visitaba en la enfermería de la cárcel, y luego se suicidó. Para Noviembre las autoridades carcelarias y el procurador general investigaban el incidente.

Aunque la ley dispone que los internos deberán separarse según la gravedad del crimen, las autoridades no tienen la capacidad para hacerlo. Según estimados de la Dirección de Prisiones, el 58 por ciento de los detenidos estaban en espera de ser enjuiciados o bajo arresto preventivo. La ley dispone que el plazo de espera previo al juicio no debe exceder los tres meses, pero puede ser prorrogado hasta 18 meses en ciertos casos complejos. La Dirección de Prisiones reportó que la mayoría de los presos en detención previa a juicio tenían que esperar tres meses, pero había casos de personas en detención previa a juicio que tuvieron que esperar hasta un año.

Los jóvenes fueron procesados en tribunales especializados de menores, y en general fueron detenidos en facilidades para menores. En agosto había 464 presos menores de edad.

En el caso de los CRCs, algunos internos discapacitados mentales fueron separados/apartados y recibieron tratamiento, incluyendo terapia, para sus enfermedades. No se hicieron esfuerzos por brindar servicios en las cárceles tradicionales a presos con discapacidades mentales.

Administración: El mantenimiento de registros y archivos en las prisiones era inadecuado, principalmente por la falta de recursos. El director general de prisiones no reportó ninguna mejoría al respecto durante el año. Las autoridades utilizaron sentencias alternativas para

criminales no violentos; sin embargo, no se disponía de información respecto a leyes específicas, órdenes ejecutivas, ni estadísticas precisas.

Los internos podían realizar sus prácticas religiosas, y en sentido general tenían acceso a visitantes, pero éstos muchas veces debían sobornar a los guardianes de la prisión para poder visitar a los presos. La Oficina del Defensor del Pueblo depositó un recurso de amparo contra la cárcel del palacio de justicia en San Francisco de Macorís en el año 2011 porque ésta no permitía a los abogados y parientes acceso a los presos durante los fines de semana. En el 2012 el Tribunal Constitucional le ordenó al procurador general que permitiera visitas carcelarias cumpliendo con el protocolo legal, pero según la ONG Participación Ciudadana, el fallo no ha sido ejecutado. A los presos se les permitían visitas conyugales, y a las mujeres presas que daban a luz en la prisión se les permitía mantener a los hijos consigo por un período de hasta un año. Algunos CRCs disponían de un área recreativa para los bebés de las presas. Sin embargo, la Dirección de Prisiones reportó que para noviembre no había niños dentro del sistema. Muchas veces a los internos no se les llevaba a comparecer ante el tribunal a menos que sobornaran a los guardianes. Igualmente, los internos tenían que pagar sobornos para el permiso de asistir a los cursos de capacitación vocacional que se ofrecen en algunas facilidades. Los oficiales carcelarios aceptaban dinero a cambio de la recomendación de que el interno fuera liberado bajo fianza o liberado por motivos de salud. Hubo alegatos creíbles de que los internos podían pagar sobornos para obtener su libertad condicional anticipada.

El programa CRC servía como centro de rehabilitación para preparar a los internos para su eventual regreso a sus comunidades. Los CRCs ofrecían oportunidades educativas, laborales y artísticas para rehabilitar a los internos en un ambiente de respeto y disciplina. En el CRC de Najayo, la administración colaboró con una universidad técnica local para ofrecer cursos académicos por la mañana cinco días por semana. Estas clases iban desde primaria hasta el bachillerato.

Monitoreo Independiente: El gobierno permitió visitas y monitoreo por los medios de comunicación y por observadores no-gubernamentales financiados y operados independientemente. Estos grupos operaban independientemente del gobierno. Manuel María Mercedes, quien también era el director de la NHRC, sirvió como ombudsman de prisiones. Los presos podían someter quejas de su tratamiento, ya sea verbalmente o por escrito, y la mayoría lo hicieron a través de parientes, abogados o defensores de los derechos humanos. Los defensores públicos también prestaron servicios legales a los presos, y en algunos casos les ayudaron con ciertas quejas, algunas de las cuales fueron referidas a la Dirección de Prisiones.

Mejoras: El gobierno hizo avances con nuevos CRCs, donde los presos experimentaron mejores condiciones en comparación con otras instituciones. El gobierno siguió trabajando en la cárcel tradicional de Najayo con el fin de convertirla en un CRC, y durante el año construyó un nuevo CRC de mujeres.

d. Detención o Arresto Arbitrario

El Código de Procedimiento Penal (CPP) prohíbe la detención sin orden judicial a menos que al sospechoso lo arresten en flagrante delito o en otras circunstancias limitadas. Las autoridades pueden detener a la persona sin presentar cargos por un período de hasta 48 horas.

El arresto y detención arbitrarios siguen siendo un problema; hubo numerosos reportes de individuos arrestados y posteriormente liberados con poca o sin explicación de la detención. Según la NHRC, más de 50 personas fueron detenidas de manera arbitraria hasta Septiembre.

Rol de la Policía y las Fuerzas de Seguridad

La Policía Nacional, la Policía Turística, el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), la DNCD, la Autoridad de Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil (CESAAC), la Policía Metropolitana, la Autoridad de Seguridad Portuaria (CESEP), la guardia fronteriza (CESFRONT), y las fuerzas armadas (ejército, fuerza aérea y marina) constituyen las fuerzas de seguridad. El Ministerio de Interior y Policía es responsable de tomar las decisiones políticas que afectan a la policía. Los militares, CESAAC, CESEP, y CESFRONT son dependencias del ministerio de las fuerzas armadas; la DNI y la DNCD, que tienen personal proveniente de la policía y de los cuerpos militares, se reportan directamente al presidente.

El Presidente Medina elaboró un plan de seguridad ciudadana para crear y ejecutar iniciativas políticas, regulaciones y reforma administrativa. Como parte de dicho plan, en el año 2012 el Presidente Medina creó una comisión para reformar la Policía Nacional, con el objetivo de aumentar el salario de los miembros de la policía, dotarles de mejores equipos, elevar el nivel educativo, pero para noviembre el Congreso todavía no había aprobado las leyes que se requieren para implementar las reformas. En mayo el presidente creó un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y dispuso que la función del Observatorio Ciudadano creado en el 2012 fuera recoger, consolidar, procesar y analizar la información criminal del país. El Presidente Medina también redefinió a los miembros de la Unidad Técnica Operativa del Observatorio para que se incluyera a la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, el Instituto de Ciencias Forenses, la Fiscalía, la Autoridad Metropolitana de Transporte, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Oficina Nacional de Estadísticas, el Ministerio de la Mujer, el Consejo Nacional para Niños/Niñas y Adolescentes, y el Ayuntamiento de Santo Domingo.

Como parte de esta iniciativa, el Presidente Medina introdujo patrullas mixtas callejeras de militares y policías, designó a nuevos oficiales superiores de la policía, y a un nuevo jefe de la policía, y aprobó un nuevo código penal. El presidente también desplegó a unos 4,000 miembros del ejército para ayudar a la policía en un intento por reducir el crimen y mejorar la seguridad ciudadana en general.

Las autoridades despidieron o enjuiciaron a miembros de la policía a quienes se determinó habían actuado al margen de los procedimientos policiales establecidos. El Departamento de Información y Estadísticas de la Policía Nacional reportó que unos 48 oficiales de la policía fueron despedidos por mala conducta en los meses hasta Septiembre.

La Unidad de Asuntos Internos investigó con eficacia los cargos de conducta grave de miembros de la Policía Nacional. Estos casos se refieren a agresión física o verbal, amenazas, uso

inadecuado de arma de fuego, atracos, y robos. Asuntos Internos llevó a cabo 921 investigaciones entre enero y julio. De estas investigaciones, 125 responden al uso excesivo de fuerza, 235 a agresión, 153 a amenazas de muerte, y 130 a corrupción policial. Las investigaciones produjeron recomendaciones de 73 despidos y 150 sanciones. La oficina de estadísticas publicó los nombres de 48 policías despedidos, cuatro obligados al retiro por mala conducta, y 378 sancionados hasta Septiembre. Las autoridades persiguieron judicialmente o investigaron a oficiales superiores sospechosos de estar involucrados en menor grado en actividades criminales. Asuntos Internos reportó que entre enero y julio, había recomendado 12 despidos y nueve acciones disciplinarias contra oficiales superiores por actividades ilícitas. El 30 de mayo el periódico local, *El Día*, reportó que el Jefe de la Policía Nacional aceptó y reconoció que la policía protegía a individuos que mataban a delincuentes conocidos.

El entrenamiento para soldados y oficiales y personal enlistados de la DNCD, además de miembros de la policía nacional, incluía instrucciones sobre los derechos humanos. Según el Departamento de Estadísticas e Información de la Policía Nacional, unos 257 policías recibieron hasta Septiembre capacitación en derechos humanos en el Instituto de Educación Superior de la Policía; otros 807 policías y civiles fueron entrenados en derechos humanos en el Instituto de la Dignidad Humana de la Policía, y 2,187 recibieron entrenamiento en derechos humanos en la Escuela para la Seguridad Ciudadana. El Ministerio de las Fuerzas Armadas durante el año brindó entrenamiento u orientación sobre derechos humanos a oficiales de varios rangos además de civiles. CESFRONT llevó a cabo entrenamiento obligatorio de derechos humanos en sus facilidades de entrenamiento para varios cientos de oficiales fronterizos. La Policía Nacional Colombiana entrenó a unos 600 policías dominicanos en derechos humanos. El Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad entrenó a unos 168 oficiales de la policía. El director de la Escuela Superior de Derechos Humanos y Derechos Humanitarios Internacionales reportó que para el mes de Agosto la escuela había entrenado a unas 1,583 personas. La escuela también contaba con programas de pos-grado donde participaron militares y civiles del Congreso, fiscalías, la Suprema Corte, ministerios del gobierno, la Policía Nacional, y la Junta Central Electoral.

Procedimientos de Arresto y Tratamiento a Detenidos

La Constitución dispone que una persona acusada puede ser detenida hasta por 48 horas sin la emisión de una orden de arresto, antes de ser presentada ante las autoridades judiciales. También dispone del recurso de procesos de habeas corpus para solicitar la liberación de aquellas personas detenidas ilegalmente. El CPP establece un límite más restrictivo de 24 horas para presentar cargos formales, disposición que por lo general se cumple. Todo preso detenido durante más de 48 horas sin ser formalmente instruido de cargos tiene derecho a presentar un recurso de habeas corpus. El juez presidente de dicha audiencia tiene la facultad de ordenar la libertad del detenido cuando éste haya cumplido las 48 horas sin haber sido formalmente acusado, o cuando existe evidencia insuficiente de que el detenido haya cometido un crimen y que justifique la continuación de su detención. La decisión del juez de liberar al detenido está sujeta a apelación por parte del fiscal.

La ley también permite que las autoridades policiales detengan sin orden de arresto a un acusado atrapado en flagrante delito, o quien de manera razonable pudiera ser vinculado a un crimen,

como por ejemplo casos que impliquen a presos en persecución o en fuga. A veces la policía detiene a sospechoso para fines de investigación o interrogación por más de 48 horas. Muchas veces la policía arresta a todos los sospechosos y testigos de un crimen, y utiliza el proceso investigativo para determinar cuáles individuos son inocentes y merecen ser liberados, y aquellos a quienes deben mantener bajo arresto. Aún así, el éxito de audiencias de habeas corpus redujo el número de estos abusos de manera significativa.

Aún cuando anteriormente sólo se concedía a unos pocos acusados, la libertad bajo fianza se hizo más común bajo el CPP, lo que requiere una revisión judicial de las detenciones en un punto anterior en un caso penal. El sistema no evitó que los acusados liberados bajo fianza se fugaran y se escondieran. En algunos casos observadores sospecharon que la concesión de la libertad bajo fianza y la posterior desaparición del sospechoso se debían a la corrupción o ineficiencias dentro del sistema judicial.

La Constitución les concede a los defensores públicos un reconocimiento constitucional, y la ley requiere que se les suministre asesoría legal a los acusados indigentes. La Oficina Nacional de Defensoría Pública provee asesoría y representación legales a personas indigentes, pero las limitaciones de recursos resultan en niveles inadecuados de personal, limitaciones en los servicios, y una muy baja calidad de los servicios prestados. Por consiguiente, la mayoría de los detenidos y presos que no pueden costearse los servicios de defensa no tuvieron a su disposición acceso puntual a asesoría legal. Los defensores públicos no deben tener una carga de trabajo que exceda los 200 casos, pero en septiembre la Oficina de Defensoría Pública reportó que los defensores públicos tenían cargas de 350 a 750 casos. A nivel nacional había 23 oficinas de defensoría pública, con 118 defensores públicos, 32 investigadores, y 23 coordinadores para las diferentes oficinas. Además, 27 abogados estaban autorizados a trabajar como defensores públicos, pero no formaban parte de la Oficina de Defensoría Pública. Ésta no supervisaba sus trabajos. El gobierno continuó su programa de entrenar a los defensores públicos en los cambios relevantes causados por la implementación del CPP, y ampliar el entrenamiento para fiscales.

La ley prohíbe el interrogatorio de jóvenes por parte de la policía o en la presencia de la policía. Los fiscales y jueces manejan las interrogaciones de jóvenes. La pena máxima para menores de edad, definidos como personas que tienen menos de 18 años de edad, que violan la ley, es de ocho años de prisión.

Arresto Arbitrario: La policía continuó la práctica de hacer redadas esporádicas en comunidades de bajos ingresos y altos niveles de criminalidad, durante las cuales arrestaban y detenían a individuos sin tener órdenes de arresto, supuestamente para combatir el crimen. Durante estas redadas la policía arrestaba a un gran número de residentes e incautaba bienes personales alegando que lo utilizaban en actividades criminales.

Detención Preventiva: Muchos sospechosos sufrieron una larga detención preventiva. Bajo el CPP el juez posee la autoridad para ordenar que el detenido permanezca bajo custodia policial por un período de tres a 18 meses. Según la Dirección de Prisiones, el 58 por ciento de los presos se encontraban bajo custodia preventiva o previa a juicio, y el tiempo promedio típico de detención preventiva era de tres meses; pero hubo casos de prisión preventiva que duraba hasta un año. El tiempo transcurrido en prisión preventiva cuenta para completar una sentencia. El

Ministerio Público seguía implementando un sistema automatizado de rastreo de casos que permitía a los fiscales rastrear casos de detención preventiva con mayor eficacia, y a pesar de que no era su objetivo principal, el sistema redujo el número de ocasiones en que la detención preventiva excediera los plazos fijados por el CPP.

La falta de las autoridades carcelarias de presentar al acusado para audiencias judiciales causó los aplazamientos de algunos juicios. A los presos se les posponían las fechas de sus audiencias porque no los llevaban desde la cárcel hasta el tribunal, o porque su abogado, co-acusados o testigos no comparecían. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó que aproximadamente el 60 por ciento de los detenidos no fueron llevados al tribunal en las fechas de sus audiencias. El gobierno no suministraba los fondos para transportar a todos los acusados entre la cárcel y el tribunal. A pesar de las protecciones adicionales para los acusados en el CPC, en algunos casos las autoridades retenían a los reclusos más allá de las fechas límite estipuladas, a pesar de que no se les presentaba cargos formales en su contra.

La judicatura creó oficinas de servicios en varias ciudades para manejar los asuntos urgentes que requieren de la presencia de un juez, como por ejemplo obtener una orden de arresto o allanamiento, y la conducción de audiencias de conocimiento de cargos. Estas oficinas de servicios judiciales constituyen parte de los esfuerzos para hacer más eficiente y reorganizar los tribunales en cumplimiento con el CPP.

Detención de Solicitantes de Asilo Negados o Personas Apátridas: Durante el año hubo casos aislados de personas que solicitaban asilo que fueron detenidos por falta de documentación. El gobierno se comprometió a posponer la deportación de personas indocumentadas hasta Mayo del 2015. No hubo redadas ni deportaciones masivas durante el año, pero algunas ONGs seguían reportando deportaciones aisladas (ver las secciones 2.d. y 6).

e. Rechazo de un Juicio Público Justo

La ley dispone una judicatura independiente; sin embargo, a pesar de una mayor independencia judicial, todavía se evidencian algunos casos de influencia política en la toma de decisiones. La interferencia por parte de entidades públicas, cuando ocurría, tendían a ser pronunciamientos públicos respecto a casos activos y una persecución selectiva. A veces parecía que los jueces de los tribunales superiores intentaban incidir en los fallos de los tribunales inferiores. Además, la corrupción seguía siendo un problema grave (ver la sección 4).

Procesos de Juicio

La ley dispone la presunción de inocencia, el derecho a la apelación, y el derecho de enfrentar o interrogar a testigos. La ley establece el derecho del ciudadano a que no sea privado de su libertad sin juicio o formalidades legales, ni por motivos que no sean los dispuestos por ley, el derecho contra la auto-incriminación, y el derecho a la defensa en un juicio imparcial y público. El acusado tiene derecho a permanecer callado. La ley también dispone un abogado de defensoría pública para cada persona que no pueda costear un abogado, pero los niveles de personal eran inadecuados para suplir la demanda. Los juicios son públicos, pero no se usan

jurados. Según la constitución y la ley, el acusado tiene derecho a estar presente y consultar a un abogado/asesor legal de manera oportuna.

Hubo alegatos creíbles de que las autoridades en algunos casos violaron estos derechos, pero hubo mejoría en el cumplimiento del debido proceso a medida que las autoridades se fueron familiarizando con las modificaciones al CPP. La Fiscalía debe notificarle al acusado y al abogado los cargos criminales y la evidencia que presentarían en el tribunal. Los acusados y abogados tienen acceso a la evidencia que presenta el gobierno, y pueden confrontar a testigos adversos, pero solamente después de la audiencia preliminar, cuando el juez haya aprobado la acusación formal. El acusado tiene derecho a presentar a sus propios testigos y evidencia.

Los tribunales policiales y militares comparten jurisdicción sobre casos que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad. Mientras los tribunales tienen jurisdicción sobre casos que involucran la violación de reglas y regulaciones internas, los tribunales civiles penales manejaban casos de asesinato y otros crímenes graves supuestamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.

Presos y Detenidos Políticos

No hubo reportes de presos ni detenidos políticos.

Procedimientos Judiciales Civiles y Remedios

Existen sistemas judiciales separados para reclamos bajo la ley penal, la ley comercial y civil, y la ley laboral. Los tribunales comerciales y civiles según reportes sufrían de largos atrasos en la adjudicación de casos, aunque sus fallos en general eran ejecutados. Como en los tribunales penales, la indebida influencia política o económica en los fallos de los tribunales civiles seguía siendo un problema.

Los ciudadanos pueden recurrir al recurso de amparo, acción que procura remediar la violación de un derecho constitucional, incluyendo las violaciones de derechos cometidas por oficiales judiciales. Este recurso no se usaba comúnmente, con la excepción de aquellas personas que tuvieran asesores legales sofisticados.

Casos que involucran la violación de los derechos humanos de algún individuo pueden ser presentados a través de solicitudes de individuos u organizaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR), la cual a su vez puede someter el caso al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. El tribunal puede ordenar remedios civiles, incluyendo una justa compensación al individuo perjudicado.

Decisiones del Tribunal Regional de Derechos Humanos

Desde el año 2005 el gobierno no ha cumplido plenamente con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que el país tenía la obligación legal, bajo su Constitución y también por virtud de convenciones internacionales, de reconocer la ciudadanía de los hijos de inmigrantes nacidos en la República Dominicana. La Ley 169-14 (la

Ley de Naturalización), promulgada el 23 de mayo, dispone una vía para lograr la ciudadanía para los hijos de inmigrantes que nacieron en República Dominicana. La ley se encontraba en su fase de implementación durante el año (ver la sección 2.d., Personas Apátridas).

El 22 de Octubre la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en el caso de *Benito Tide Méndez v. la República Dominicana*, que el fallo del 2013 del Tribunal Constitucional (TC) y elementos de la Ley 159-14 violaban la Convención Americana de Derechos Humanos. La IACHR anteriormente había depositado una petición ante el tribunal donde argumentaba que Benito Tide Méndez y 26 otros individuos fueron detenidos de manera arbitraria y deportados a Haití. El 22 de Octubre el tribunal condenó la Ley de Naturalización por establecer un proceso que exigía que un grupo que anteriormente habría sido considerado como ciudadanos por nacimiento, a que primero se registraran como “extranjeros” antes de someterse a un proceso de naturalización como si fueran inmigrantes. El tribunal falló que el país debía de inmediato tomar medidas legislativas inmediatas para anular el fallo del TC. El tribunal también estuvo de acuerdo con la apreciación inicial del IACHR de que las deportaciones demostraban un patrón de discriminación y ordenó al gobierno a pagarles una compensación a las víctimas.

El gobierno volvió a abrir el caso del periodista Narcisco González Medina después del fallo en el 2012 de la Corte Interamericana de que la República Dominicana era responsable de su desaparición forzada en el 1994 después de que él criticara al gobierno. El caso permanecía bajo investigación durante el año.

Para el final del año el gobierno todavía no había cumplido con el fallo del 2012 de la Corte Interamericana respecto al uso innecesario de fuerza letal por parte del ejército durante la Masacre de Guayubín del año 2000. En Septiembre la Corte Interamericana estaba evaluando el cumplimiento del fallo por el gobierno.

f. Injerencia Arbitraria con la Intimidación, Familia, Hogar o Correspondencia

La ley prohíbe la penetración arbitraria a una residencia privada, exceptuando cuando la policía se encuentra persiguiendo a un sospechoso, cuando al sospechoso lo atrapan en el acto de cometer un crimen, o si la policía sospecha que una vida corre peligro. La ley dispone que toda otra penetración a una residencia privada requiere de una orden de arresto o cateo emitida por un juez; sin embargo, la policía realizó cateos e incautaciones ilegales, incluyendo allanamientos sin órdenes en residencias privadas de muchos barrios pobres.

Aunque el gobierno negaba haber utilizado la intervención telefónica, monitoreo de emails/correos electrónicos privados u otros métodos subrepticios con el propósito de interferir en la vida privada de individuos y familias, grupos de derechos humanos y políticos de la oposición alegaban que dicha interferencia continuaba.

Sección 2. Respeto a las Libertades Civiles, Incluyendo:

a. Libertad de Expresión y de Prensa

La constitución dispone la libertad de expresión y prensa, y en general el gobierno respetó estos derechos.

Libertades de Prensa: Los medios independientes de comunicación estuvieron activos y expresaron una amplia variedad de opiniones y perspectivas con algunas restricciones. La ley criminaliza la difamación y el insulto con penas mayores para ofensas cometidas contra personalidades públicas o del estado, que las ofensas contra individuos. Una demanda en el Tribunal Constitucional que procuraba la anulación de varios artículos del código penal y de la ley de Expresión y Diseminación del Pensamiento que penalizan el periodismo quedaba pendiente. En general individuos y grupos pudieron criticar al gobierno de manera pública y privada sin represalias, aunque hubo varios incidentes donde las autoridades intimidaron a periodistas u otros comunicadores profesionales.

Violencia y Hostigamiento: Periodistas y otras personas que trabajaban en los medios de comunicación ocasionalmente fueron hostigados y físicamente atacados.

El 7 de Octubre Marino Zapete, productor de televisión y periodista de investigación, informó que había recibido amenazas de parte del jefe de la agencia gubernamental Instituto de Desarrollo y Cooperativa Crediticia (IDECOOP), Pedro Corporán, y que su casa estaba bajo vigilancia después de que Zapete denunciara y reportara graves irregularidades en el manejo de fondos públicos en IDECOOP. Corporán demandó a Zapete por difamación e injuria. El 8 de noviembre la Corte de Apelación se pronunció a favor de Zapete, fallando que el derecho a la libertad de expresión era más importante que el honor de la persona supuestamente agraviada.

Censura o Restricción de Contenido: La Constitución dispone la plena protección de la confidencialidad de las fuentes periodísticas, e incluye una “cláusula de consciencia” que permite al periodista negarse a cubrir asignaciones de trabajo. Sin embargo, periodistas locales seguían practicando la auto-censura, sobre todo cuando la cobertura podría tener un efecto adverso sobre los intereses económicos o políticos de los propietarios de los medios.

Libertad de Internet

No hubo restricciones gubernamentales sobre el acceso al internet, ni reportes creíbles de que el gobierno monitoreara los correos electrónicos o salas de chateo por Internet sin la autoridad legal correspondiente. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el 46 por ciento de los ciudadanos utilizaron el Internet en el 2013.

Libertad Académica y Eventos Culturales

No hubo restricciones gubernamentales a la libertad académica ni eventos culturales.

b. Libertad de Reunión Pacífica y Asociación

La ley dispone la libertad de reunión y asociación con algunas excepciones, y en general el gobierno respetó estos derechos.

Libertad de Reunión

La ley dispone la libertad de reunión. Marchas y reuniones públicas al aire libre requieren permisos, los cuales por lo general son concedidos por el gobierno. En varias ocasiones miembros de la policía utilizaron la fuerza para dispersar grupos de manifestantes, y mataron o hirieron a manifestantes o espectadores. La CNDH reportó que 100 personas fueron heridas y cinco personas murieron cuando se intentaba dispersar varias manifestaciones.

Libertad de Asociación

La ley dispone la libertad de asociación, y en general el gobierno ha respetado este derecho (ver la sección 7.a.).

c. Libertad de Cultos

Ver el *Reporte de Libertad Internacional de Cultos* del Departamento de Estado en <http://www.state.gov/religiousfreedomreport/>

d. Libertad de Movimiento, Personas Desplazadas Internamente, Protección a Refugiados, y Personas Apátridas

La ley dispone la libertad de movimiento interno, viajes al extranjero, emigración, y repatriación, y en general el gobierno ha respetado estos derechos, con algunas excepciones.

El gobierno redujo temporalmente su cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (UNHCR) de las Naciones Unidas, en brindar protección y asistencia a refugiados y personas que buscan asilo. Después de negociaciones sobre el rol del UNHCR, el gobierno y el UNHCR firmaron un acuerdo de entendimiento en noviembre, definiendo claramente el rol del UNCHR en el país y su relación con el gobierno.

Movimiento a lo Interior del País: Grupos locales e internacionales de derechos humanos reportaron que potencialmente cientos de miles de personas carentes de documentación adecuada, incluyendo a inmigrantes haitianos y personas de ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana, confrontaban obstáculos para viajar tanto dentro como fuera del país.

La Dirección General de Migración (DGM) reportó que ninguna persona fue expulsada a Haití durante el año.

En el año 2011 el entonces Presidente Fernández promulgó regulaciones que implementaban parcialmente la Ley de Migración del año 2004, que concedía la excepción “en tránsito” a la ciudadanía dominicana para individuos nacidos en el país a los hijos de inmigrantes ilegales y ordenó el Plan Nacional de Regularización, que entró en vigencia durante el año. Las regulaciones definen las entidades burocráticas que manejan asuntos migratorios, hacen un llamado para la inscripción de todo extranjero en el país, ordenan la inscripción de niños nacidos como hijos de extranjeros no-residentes en un registro especial (Registro de Nacimiento de Extranjeros), establecen los requisitos para la obtención del status de residencia legal, trazan el

plan para la importación de mano de obra temporera (responsabilizando a los empleadores por el regreso de los trabajadores que ellos ingresan al país), y de manera explícita reiteran la política vigente que sujeta a todo inmigrante indocumentado a la deportación/expulsión. En Enero el gobierno declaró que iba a suspender toda deportación hasta después de Mayo 2015 para darles a los inmigrantes indocumentados la oportunidad de participar en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. ONGs reportaron que las deportaciones cesaron o que el gobierno deportó muy pocos inmigrantes indocumentados que habían llegado en años recientes.

Protección a Refugiados

Acceso al Asilo: La ley dispone la concesión de asilo o status de refugiado, y el gobierno ha creado un sistema para brindar protección a refugiados pero no lo ha implementado de manera efectiva. La persona que solicita el status de refugiado debe ser referida por la Oficina Nacional de Refugiados en la Dirección de Migración, al Sub-Comité Técnico de la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE), presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El sub-comité tiene la responsabilidad de hacerle una recomendación a la comisión, la cual está integrada por miembros provenientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, DNI, y DGM. El pleno de la comisión tiene la responsabilidad de tomar la decisión definitiva respecto a la solicitud.

La comisión se reunió cada 15 días durante el año para evaluar las solicitudes. Según UNHCR, la comisión llegó a una decisión respecto a 294 casos en el año 2013, rechazando a 290 y aprobando cuatro solicitudes de asilo. La comisión llegó a una decisión respecto a 164 casos durante el año, rechazando los 164. Según la DGM, para Octubre unas 10 personas solicitaron el reconocimiento de su status de refugiados, de los cuales seis casos se vencieron, dos fueron rechazados por incumplimiento de los requisitos tanto nacionales como internacionales para la calificación de refugiado, y dos casos permanecían bajo consideración.

En 2013 y durante el año CONARE adoptó una serie de resoluciones respecto al asilo. La Resolución 008/13 aprobada en Diciembre del 2013 fija un plazo máximo de 15 días para solicitar el status de refugiado después que el individuo ingresa al país, o de lo contrario el caso se declara inadmisibile. Según el UNHCR, en junio las solicitudes de de asilo de dos personas procedentes de Siria fueron declaradas inadmisibles bajo esta nueva regla, y se les dio un plazo de 30 días para abandonar el país de manera voluntaria o en caso contrario serían deportados.

Bajo la Resolución 004-14 aprobada en agosto, CONARE puede declarar que una persona haya descontinuado la solicitud de asilo en el caso de que no renueve el permiso de solicitante de asilo dentro de los cinco días de su vencimiento, o si no reporta un nuevo lugar de residencia dentro de cinco días, o si no renueva el permiso de residencia temporal dentro de cinco días, si viaja fuera del país sin la previa autorización, o si pasa más de 30 días fuera del país. Esta resolución también declara como inadmisibile toda solicitud si la persona solicitante intenta llegar a un tercer país desde la República Dominicana antes de solicitar el status de refugiado.

Según la ley los refugiados reconocidos son considerados como residentes temporales, y sus documentos de refugiado deben ser renovados cada año después de su aprobación por CONARE. En la práctica, CONARE revisaba cada año la decisión respecto al status del refugiado como pre-

condición para la renovación del permiso de residencia del individuo. Además, la Resolución 009-13 fija las reglas y regulaciones de reunificación familiar de refugiados, que según el UNHCR crean numerosos requisitos que dificultan la reunificación de los refugiados con sus familiares.

Según el UNHCR, para Agosto el país tenía aproximadamente 623 refugiados bajo el mandato de UNHCR, 40 refugiados reconocidos por CONARE en 2012 y 2013, y 800 solicitantes de asilo. La mayoría de los refugiados y solicitantes de asilo eran nacionales haitianos, pero también había refugiados procedentes de Cuba, Irán, Iraq, Sri Lanka y Siria.

Devolución: Aunque el gobierno dispuso alguna protección contra la expulsión o devolución de personas a países donde sus vidas o libertad pudieran verse amenazadas por motivo de su raza, religión, nacionalidad, participación en un grupo social en específico, opinión política, o casta, todavía existía el riesgo de deportación. La protección generalmente se aplicaba a individuos que lograran el acceso al proceso de refugio y a quienes se les había emitido constancia de que eran refugiados o que tenían solicitudes pendientes. Los documentos suministrados no conceden derechos legales de importancia, como por ejemplo la residencia; tampoco evitan la interrupción de estudios educativos superiores a octavo para los hijos de refugiados. Debido a una falta de entrenamiento, no todos los oficiales que pudieran apresar a tal persona reconocerían estos documentos.

Acceso a Servicios Básicos: De manera rutinaria las autoridades le niegan actas de nacimiento a los hijos nacidos de refugiados haitianos, además de la educación, salud y documentos de seguridad.

Personas Apátridas

La Constitución del año 2010 dispone que toda persona nacida en el país es nacional dominicano, con la excepción de los hijos que nacen de padres que se encuentran en el país de manera ilegal. En el 2005 la Suprema Corte ratificó la Ley General de Migración del año 2004, que redefinió el término “en tránsito”, al extranjero que entrara al país para llegar a otro destino, a todo trabajador temporal, y posteriormente a inmigrantes irregulares. Bajo la ley la excepción constitucional que les negaba la nacionalidad a hijos nacidos en República Dominicana de personas en tránsito ya no se aplicaba solamente a los padres que estaban en tránsito a través del país durante un período de 10 días o menos, sino que consideraba a todos los no-residentes como si tuvieran un status de “en tránsito.” La ley asigna una definición amplia a no-residentes para incluir a turistas, estudiantes, trabajadores extranjeros temporales, y todo inmigrante indocumentado. El Registro Civil, administrado por la Junta Central Electoral (JCE), aplicó la ley de migración de manera retroactiva y se negó a emitir nuevos documentos de identidad o renovar documentos vencidos a personas sospechosas de ser hijos de padres extranjeros que no pudiesen demostrar su residencia o status legal en el país, alegando que se les habían emitido actas de nacimiento de manera inadecuada.

Aún antes de la implementación de la Constitución, las autoridades les negaban la nacionalidad dominicana a los hijos de inmigrantes indocumentados. Antes del 2004 las leyes de migración concedían privilegios “en tránsito” a extranjeros que entraban al país “con la principal intención

de pasar por el país hacia un destino exterior.” En el 2007 la JCE implementó un sistema de registro conocido como el “Registro de Nacimiento de Extranjería” que permitía que los niños nacidos en el país hijos de padres que no fueran residentes legales recibieran un acta de nacimiento especial. Estos niños cuyos padres contaban con documentos de su país de origen podrían ser registrados en el libro, y luego a los padres se les entregaría un reporte oficial del nacimiento que no confiere la ciudadanía. ONGs locales e internacionales reportaron que desde la implementación del Registro de Nacimientos de Extranjería, los hospitales y registros civiles no registraban a los numerosos hijos de inmigrantes haitianos y sus descendientes. Se estima que cada año entre 10,000 y 20,000 niños nacen de de inmigrantes haitianos y sus descendientes, pero pocos niños de los registrados en el Registro de Nacimientos de Extranjería eran de ascendencia haitiana. Las ONGs reportaron que algunos padres haitianos, quienes se encontraban en el país legalmente y cuyos hijos eran nacionales dominicanos bajo la ley dominicana, fueron obligados a registrar el nacimiento de sus hijos en el libro de extranjería.

Las autoridades del registro civil simultáneamente comenzaron a revisar el status legal y los documentos civiles de los dominicanos de ascendencia haitiana. Muchos de estos individuos nacieron en territorio dominicano en una época cuando era de aceptación general que la disposición de *jus soli* de la constitución les concedía la nacionalidad dominicana. Sin embargo, desde el 2007 oficiales del gobierno han tomado fuertes medidas contra otorgar la ciudadanía a personas de ascendencia haitiana nacidas en el país y cuyos padres no pudieron documentar su estadia legal en el país. Estas medidas incluyen el rechazo a la renovación de documentos dominicanos de nacimiento e identidad, resultando en una condición de apatridia legal. El gobierno declaró que dichos rechazos estaban basados en evidencias de documentación fraudulenta, pero los grupos de apoyo o *advocacy* alegaban que las acciones iban dirigidas a personas cuyos padres eran haitianos o cuyos nombres parecían haitianos y constituían actos de desnacionalización.

Como resultado de estas políticas, los descendientes de inmigrantes haitianos que trabajaron y se asentaron en el país durante el siglo 20 – quienes nacieron en el país antes del 2010 y disfrutaban del derecho a la nacionalidad dominicana – confrontan un riesgo mayor de convertirse en apátridas. Esta situación se agravó por el hecho de que, hasta junio del 2012, la Constitución haitiana no permite la doble ciudadanía. Individuos de ascendencia haitiana que obtuvieran la nacionalidad dominicana renunciaban a su derecho a la ciudadanía haitiana. Además, la adquisición de la nacionalidad haitiana a través de la aplicación de un marco de nacionalidad de *jus sanguinis* podría causar problemas para personas cuyos padres perdieron sus vínculos significativos con Haití o que no tuvieran constancia de la ciudadanía haitiana debido a su presencia durante muchos años en la República Dominicana. Estos problemas se agravan para personas de la segunda o tercera generación nacidas en República Dominicana.

En Septiembre del 2013 el TC dictaminó que los niños nacidos en el país hijos de extranjeros “en tránsito” no son considerados como nacionales dominicanos. El TC ordenó a la JCE a auditar su registro de nacimientos desde el 1929 para identificar a los extranjeros que podrían estar registrados inadecuadamente, y transferirlos a un listado por separado para el registro de nacimientos extranjeros. El TC notó que los extranjeros en tránsito pueden modificar su condición migratoria para obtener la residencia legal permanente.

IACHR, UNHCR y la Comunidad Caribeña (CARICOM) expresaron su profunda preocupación por el fallo/dictamen del TC de Septiembre 2013. CARICOM hizo un llamado al país para que adoptara medidas para proteger los derechos humanos y las preocupaciones de individuos que se verían afectados por el fallo/dictamen.

La depuración del Registro Civil de la JCE estimaba que unas 24,392 personas estaban registradas de manera irregular en el registro civil, de los cuales 13,672 eran de ascendencia haitiana. Un estudio del 2012 de la Oficina Nacional de Estadísticas y el Fondo para la Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estimaba la población total de haitianos en el país en 668,145, de los cuales 458,233 fueron identificados como inmigrantes haitianos, y 209,912 fueron clasificados como personas de ascendencia haitiana. El número preciso de personas indocumentadas aún permanece confuso.

En noviembre del 2013 el Presidente Medina decretó una amnistía, llamada el Plan de Regularización de Extranjeros. El plan indicaba que “una vía especial hacia la naturalización” beneficiaría a los extranjeros que entraron al país de manera irregular; a los extranjeros que entraron de manera ilegal (*sic*), pero excedieron el tiempo en el país o hayan violado las condiciones de su estadía en el país; y menores de edad registrados en el registro civil que nacieron en el país de madres no-residentes. Grupos de la sociedad civil criticaron elementos del plan, y argumentaban que el gobierno no había tomado en cuenta observaciones hechas por la sociedad civil o entidades de las Naciones Unidas.

El IACHR llevó a cabo una visita in situ al país en diciembre del 2013, y sus conclusiones preliminares indicaron que el fallo del TC de septiembre del 2013 implicaba la privación arbitraria de la nacionalidad, y que el fallo tenía un efecto discriminatorio, y que quitaba la nacionalidad de manera retroactiva, y conducía a una condición de apatridia para individuos no considerados como ciudadanos dominicanos.

Personas nacidas en República Dominicana de ascendencia haitiana que carecen de documentos de ciudadanía o identidad confrontan obstáculos para viajar tanto dentro como fuera del país. Además, las personas indocumentadas no pueden obtener cédulas de identificación nacional ni tarjetas para votar. Las personas que no cuentan con una cédula o certificado de nacimiento tienen acceso limitado a empleos en el sector formal; a la educación pública; registro de matrimonio y nacimiento; servicios económicos formales como por ejemplo bancos y préstamos; acceso a tribunales y procesos judiciales; y titularidad de tierras o bienes.

El 23 de mayo el Presidente Medina firmó y promulgó la Ley 169-14, “Status Especial de Individuos nacidos dentro del territorio con registro irregular en el Registro Civil y sobre Naturalización.” El 29 de julio el gobierno inició la implementación de la ley. La ley de naturalización se propone regularizar y (re)emitir documentos de identidad a aproximadamente 24,392 individuos, nacidos en el país de padres “en tránsito” entre Junio 16 del 1929 y Abril 18 del 2007, y quienes fueran pre-registrados previamente en el registro civil (Grupo A), reconociéndolos como ciudadanos dominicanos desde el nacimiento. La nueva ley también creó una vía especial a la ciudadanía para personas nacidas de padres “en tránsito” quienes nunca fueron registradas en el registro civil, incluyendo un estimado de unas 200,000 personas indocumentadas principalmente de ascendencia haitiana (Grupo B). El Grupo B debía demostrar

que habían nacido en el país antes del 18 de Abril del 2007, cuando se inició el Registro de Nacimiento de Extranjería. Posteriormente, sus nombres podrían ser registrados en ese registro. Una vez registrados, los miembros del Grupo B podrían iniciar el proceso para obtener un permiso de residencia permanente. Después de dos años pueden solicitar la naturalización. El primer plazo de solicitud para el Grupo B era de 90 días, y se venció el 26 de Octubre. En Noviembre se aprobó una enmienda para extender la fecha límite unos 90 días adicionales, con una nueva fecha cierre del 31 de enero del 2015.

Al 31 de Octubre la JCE había procesado certificados de nacimiento dominicanos para 972 miembros del Grupo A, y 1,541 miembros del Grupo B habían iniciado el proceso a registrarse en el Registro de Nacimientos de Extranjería. Para Octubre menos del 1 por ciento de los individuos afectados por el fallo/dictamen se han beneficiado de la ley. Las ONGs se quedaban de que las oficinas de la JCE estaban procesando las solicitudes de naturalización de manera inconsistente. Las ONGs reportaron que algunas oficinas se negaban a aceptar los certificados de nacimiento anulados de los solicitantes, o requerían documentos no exigidos por ley para la naturalización, agregando obstáculos a un proceso ya laborioso. Para los individuos del Grupo B (quienes nunca fueron registrados), las ONGs expresaron su inquietud en el sentido de que el plazo era demasiado corto; las campañas oficiales de información eran insuficientes; y que el 6 de Octubre se habían abierto sólo 21 de 37 centros de regularización, ninguno de los cuales estaba en la zona fronteriza con Haití.

Sección 3. Respeto a los Derechos Políticos: El Derecho del Ciudadano a Cambiar su Gobierno

La ley dispone que los ciudadanos tienen la capacidad de cambiar su gobierno a través de elecciones periódicas, libres y justas, y los ciudadanos ejercen este derecho a través de elecciones basadas en el sufragio casi universal. Miembros de la policía y del personal militar en servicio activo no pueden votar ni participar en actividades políticas partidistas.

Elecciones y Participación Política

Elecciones Recientes: En el 2012 el candidato del PLD, Danilo Medina, ganó la presidencia en unas elecciones generalmente libres y ordenadas a pesar de algunas irregularidades. El Partido Revolucionario Dominicano como partido ganó el mayor número de votos electorales, mientras que el PLD ganó el voto popular con el apoyo de los partidos de la coalición. La Organización de Estados Americanos, que tuvo presente una misión de observación electoral durante todo el proceso electoral, notó varios fallos en el marco legal que regía el proceso electoral, incluyendo el uso de recursos públicos, financiamiento de campaña, y acceso equitativo a los medios de comunicación. La misión de observadores y de otros observadores independientes recibieron quejas asociadas al derecho al voto de dominicanos de ascendencia haitiana. Debido a las políticas restrictivas de registro civil aplicadas por la JCE, miles de dominicanos de ascendencia haitiana no pudieron obtener los documentos de ciudadanía requeridos para participar en las elecciones del 2012.

Algunos observadores fueron testigos de varios miembros de partidos políticos comprando cédulas y votos el día de las elecciones. Algunos observadores también reportaron el uso de propaganda electoral en centros de votación.

Participación de Mujeres y Minorías: Por ley los partidos deben reservar para mujeres el 33 por ciento de los puestos en su boletas de candidatos para la Cámara de Diputados y cabildos. Había cuatro mujeres en el senado, que tiene 32 miembros; 40 mujeres en la cámara de diputados, que tiene 190 miembros; dos mujeres en el gabinete; cuatro mujeres en la Suprema Corte, que tiene 17 puestos; y tres mujeres en el TC que cuenta con 13 miembros. Cada partido presenta boletas, y muchas veces las mujeres candidatas estaban al final de la lista, evitando así que obtuvieran un curul en el senado o la cámara de diputados. La ley exige que los candidatos de síndico y vice-síndico de cada partido sean de diferentes géneros; había 12 síndicos femeninos y 143 vice-síndicos femeninos.

Sección 4. Corrupción y Falta de Transparencia en el Gobierno

La ley dispone penas criminales por corrupción oficial; sin embargo, el gobierno no implementó la ley de manera efectiva, y los funcionarios frecuentemente participaban en prácticas corruptas con impunidad. El procurador general investigó a funcionarios supuestamente corruptos, pero la corrupción gubernamental seguía siendo un problema serio y una queja clave del público.

Corrupción: La Oficina del Abogado Especial para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) reportó 36 investigaciones desde enero del 2013 hasta agosto de casos contra funcionarios de nivel medio y bajo, y cinco contra funcionarios de alto nivel. Esta cifra incluye 15 casos en la etapa de audiencia preliminar, seis casos concluidos de los cuales cinco fueron fallados y uno fue desestimado. Los funcionarios gubernamentales estaban renuentes a investigar seriamente y prepararse para perseguir casos que involucren a altos funcionarios actuales y pasados.

El Ministerio Público, encabezado por el procurador general, era responsable de investigar y perseguir casos de corrupción a través de PEPCA. La Cámara de Cuentas contribuyó con su aporte a la rendición de cuentas gubernamental mediante auditorías e investigaciones, las cuales formaron la base de muchos casos PEPCA de corrupción.

PEPCA, la Cámara de Cuentas, y el contralor general operaron de manera independiente, y parecían estar libres de influencia política, aunque hubo pocos casos exitosos de funcionarios públicos de alto perfil acusados de corrupción. La Cámara de Cuentas carecía de un presupuesto suficiente para cumplir sus obligaciones bajo la ley. La cámara no contaba con los recursos para auditar a todas las entidades públicas anualmente, ni para investigar todas las quejas oficialmente depositadas. La sociedad civil participó activamente en las campañas contra la corrupción a través de ONGs y los medios de comunicación. Las agencias gubernamentales tenían relaciones limitadas y muchas veces contrarias con miembros de la sociedad civil, y funcionarios gubernamentales seguían caracterizando alegaciones de corrupción como motivadas puramente por política. A pesar de que las agencias gubernamentales se quejaban de una falta de recursos, ONGs confiables notaron que el mayor impedimento a la efectividad de las investigaciones era

una falta de voluntad política para hacer cumplir la ley y enjuiciar particularmente a los políticos de alto nivel.

Organizaciones de la sociedad civil criticaron la práctica generalizada de conceder puestos en el gobierno como padrinazgo político, alegando que muchos servidores públicos, llamados “botellas,” no tenían que cumplir ninguna función por su salario. Los pequeños municipios reportaron nóminas de 200, 350, o 600 empleados cuando la capacidad de los edificios del cabildo no tenía cupo para más de la décima parte del número de empleados reportados. Un antiguo diplomático criticó públicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores por tener una nómina de 1,500 oficiales en el extranjero mientras que sólo el 25 por ciento de los mismos estaban acreditados y cumplían funciones oficiales en el país donde estaban asignados. El ministro de relaciones exteriores asumió su puesto en septiembre, declarando que una de sus metas principales era depurar el ministerio, y en semanas había retirado a 1,000 empleados de la nómina del ministerio.

En muchas ocasiones oficiales de la policía intentaron solicitar sobornos a individuos amenazados de multas o arresto. Observadores locales de los derechos humanos reportaron que autoridades migratorias y policiales detuvieron a trabajadores indocumentados de la construcción y a otros obreros de ascendencia haitiana para extorsionarles y sacarles dinero. Algunas ONGs reportaron incidentes de corrupción entre los oficiales militares y migratorios destacados en los puestos fronterizos y puntos de chequeo.

El uso de sanciones extrajudiciales continuaba. Estas medidas incluyeron el despido o traslado de personal militar, miembros de la policía, jueces, y otros oficiales gubernamentales de menor rango involucrados en actos de soborno y otras conductas de corrupción. Una actitud generalizada de tolerancia hacia algunas formas de corrupción complicaba los esfuerzos anti-corrupción.

Revelación Financiera: La Ley 311-14, que entró en vigencia en agosto, requiere que el presidente, vicepresidente, miembros del congreso, algunos encargados de agencias y otros oficiales incluyendo a los cobradores de impuestos y aranceles aduanales, declaren sus bienes personales dentro de los 30 días a partir de su contratación, elección o re-elección, y cuando finalicen sus responsabilidades. La Constitución requiere además que los funcionarios públicos declaren el origen de sus bienes, aunque esto no abarca los bienes e ingresos de cónyuges e hijos dependientes. La nueva ley también cambió la responsabilidad del Ministerio Público a la Cámara de Cuentas, de recibir y revisar estas declaraciones. La Presidente de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte, declaró públicamente que hasta noviembre solamente cinco funcionarios gubernamentales habían cumplido con la ley entregando sus estados financieros personales. La Dirección General de Rentas Internas recoge los ingresos públicos en una “cuenta única,” una iniciativa clave de transparencia para centralizar la recaudación y desembolso de recursos públicos. Como parte de esta iniciativa, el gobierno eliminó 2,934 de las 6,000 cuentas públicas estimadas hasta noviembre, aunque agencias gubernamentales con otras fuentes de ingreso seguían manteniendo a unas 3,000 o más cuentas separadas, con poca o ninguna vigilancia por el gobierno.

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental seguía operando con un mandato político fuerte pero con resultados mínimos.

En 2013 la Cámara de Cuentas entregó a PEPCA siete reportes de auditoría con hallazgos de mal uso de los fondos públicos y falta de procedimientos adecuados. Estos reportes correspondían a acciones tomadas entre el 2006 y el 2012, e implicaban tanto a las autoridades municipales como a los miembros del gobierno central. Algunas de las personas implicadas han sido llevadas ante el tribunal, mientras que otros casos permanecen bajo investigación. En los 12 meses que siguieron abril del 2013, la Cámara de Cuentas envió al contralor general para fines de monitoreo, 36 auditorías de entidades públicas con hallazgos del mal uso de fondos o deficiencia en los controles internos. Del 2008 al 2012, la Cámara de Cuentas hizo 371 recomendaciones de auditoría respecto al mal uso de fondos a 33 entidades públicas. Al 2013 cuatro entidades públicas habían implementado 56 de las recomendaciones y se encontraban en proceso de implementar 25 más. Hubo pocas o ninguna consecuencia por concepto del incumplimiento.

Acceso Público a la Información: La Constitución dispone del acceso público a la información gubernamental. La ley fija límites a la disponibilidad de dicha información solamente bajo circunstancias especificadas, tales como para proteger la seguridad nacional. Se requiere que las autoridades revelen o respondan a solicitudes de acceso dentro de 15 días laborables, y el procesamiento es gratuito o el costo es muy económico. La ley dispone castigos de hasta dos años de prisión y una prohibición de cinco años para posiciones de fe pública para funcionarios gubernamentales que impiden el acceso a la información pública. La Suprema Corte puede revisar la decisión de una agencia de negar acceso a la información. Muchas veces las respuestas eran puntuales pero incompletas, y el gobierno rechazaba solicitudes posteriores con regularidad. Aunque mucha información estaba disponible en el Internet, muchas veces era imprecisa o inconsistente con otros reportes del gobierno. Hubo poca consistencia para determinar en qué consistía la información pública y en qué no consistía, debido a la falta de una agencia única de vigilancia, lo que también imposibilitó la obtención de estadísticas acerca del número de solicitudes de información recibidas o el resultado de dichas solicitudes. Bajo la Iniciativa Participativa Anti-Corrupción, organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales llevaron a cabo actividades de acercamiento al público, y entrenamiento de servidores públicos para incentivar el uso efectivo de la ley.

Sección 5. Actitud del Gobierno Respecto a la Investigación Internacional y No-Gubernamental de Alegadas Violaciones de Derechos Humanos

Varias organizaciones nacionales e internacionales en general operaron sin restricciones por parte del gobierno, investigando y publicando sus hallazgos acerca de casos de derechos humanos. A pesar de que oficiales del gobierno muchas veces cooperaban y respondían a preguntas, grupos de derechos humanos que abogaban a favor de los derechos de los haitianos y personas de ascendencia haitiana constituyeron una excepción y enfrentaban hostigamiento ocasional por parte del gobierno.

Las Naciones Unidas u Otras Entidades Internacionales: En general el gobierno cooperaba y permitía visitas por parte de representantes de las Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales con el monitoreo de problemas de derechos humanos en el país. El UNHCR y el

gobierno han logrado negociar con éxito una nueva carta de entendimiento que le permite al UNHCR continuar su trabajo en el país. Además, el Tribunal Constitucional dictaminó en noviembre que la participación/afiliación del país en la Corte Interamericana de Derechos Humanos era inconstitucional porque el Congreso nunca había ratificado su membresía/afiliación en la misma. Hasta diciembre el ejecutivo no había fijado una posición al respecto.

Entidades Gubernamentales de Derechos Humanos: La Constitución crea el puesto de defensor del pueblo en derechos humanos, y en mayo del 2013 el senado aprobó a Zoila Martínez, anteriormente fiscal del Distrito de Santo Domingo, para un período de seis años. Las funciones del defensor del pueblo según lo indicado en la constitución son vigilar los derechos humanos fundamentales de las personas, y proteger los intereses colectivos establecidos en la constitución y la ley. En marzo Martínez anunció que su oficina había resuelto 69 casos. Varias organizaciones de derechos humanos objetaron en el TC la designación de Martínez al puesto de defensor del pueblo, alegando que se habían violado las reglas de procedimiento para la selección. El caso seguía bajo consideración en octubre.

Sección 6. Discriminación, Abusos Sociales y Tráfico y Trata de Personas

A pesar de que la Constitución prohíbe la discriminación por raza, género, discapacidad, idioma y estatus social, tal discriminación sí existía. El gobierno raras veces reconoció la ocurrencia de discriminación ni hacía esfuerzos por abordar el problema.

Mujeres

Violación y Violencia Doméstica: La ley penaliza la violencia contra la mujer, y el Estado puede perseguir judicialmente la violación, el incesto, la agresión sexual y otras formas de violencia doméstica. Las penas por estos crímenes varían entre uno y 40 años de prisión y multas desde 700 a 245,000 pesos (\$15.95 a \$5,582). Las sanciones por violación, incluyendo la violación conyugal, varían entre 10 y 15 años de prisión y una multa desde 100,000 a 200,000 pesos (\$2,278 a \$4,556). Para casos que involucran a una persona vulnerable o a un niño o niña, o si la violación ocurre bajo otras circunstancias atroces, la pena es de 10 a 20 años de prisión. El código penal enmendado castiga la violencia doméstica con cuatro a 10 años de prisión y una multa elevada. Cuando la violencia doméstica causa la incapacidad de la víctima por más de 90 días, el culpable es pasible de una sentencia de 10 a 20 años de prisión, mientras los que causan lesión o daño permanente reciben un máximo de 30 años de prisión.

La violación constituía un problema serio y generalizado. Las personas que sobrevivían la violación no reportaban el crimen, por temor al estigma social, temor a represalias, y la percepción de que la policía y el sistema judicial no les harían justicia. El estado puede perseguir judicialmente al sospechoso de violación aún cuando la víctima no presenta cargos, y las que sobreviven una violación pueden presentar cargos contra el cónyuge. En general la policía les exhortaba a las víctimas a buscar la asistencia de una unidad especializada en violencia de género, dentro de la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, defensores públicos u ONGs.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por mejorar la situación, la violencia contra la mujer seguía siendo generalizada. Los medios de comunicación publicaban con regularidad artículos sobre la violencia intra-familiar y casos de feminicidio. Según las Naciones Unidas, el 30 por ciento de las mujeres en el país han experimentado alguna forma de violencia a las manos de su compañero o ex – compañero. El procurador general reportó que hasta junio las autoridades a nivel nacional habían recibido más de 34,310 quejas por violencia de género. El procurador general reportó hasta junio 4,269 quejas de crímenes sexuales. Hasta junio la policía emitió 7,910 órdenes de restricción/alejamiento a nombre de víctimas de violencia doméstica.

Varios interesados alegaban que el número de casos de violencia contra la mujer excedían la capacidad del procurador general para manejar la situación. Según la Policía Nacional, más de 1,331 mujeres fueron asesinadas debido a la violencia de género entre enero 2008 y octubre 2014. El Ministerio de la Mujer reportó 136 casos de feminicidios hasta el 15 de octubre, comparado con 160 casos reportados por la Policía Nacional en todo 2013. Según UN Women, el 80 por ciento de las personas que sobreviven la violencia nunca presentaron una queja ante el procurador general. La Unidad de Violencia de Género, de la Policía Nacional, reportó que hasta agosto unas 60 mujeres habían muerto víctimas de la violencia doméstica, comparado con 34 muertes durante este mismo período en el 2013. Existen algunos ejemplos de persecuciones judiciales exitosas.

La Procuraduría General de la República supervisa la Unidad Especializada de Prevención y Atención a la Violencia, la cual cuenta con 17 oficinas satelitales en las 32 provincias del país. En estas oficinas las personas sobrevivientes de la violencia pueden presentar quejas criminales, obtener asesoría legal gratuita, y recibir atención psicológica y médica. La policía tenía instrucciones de reenviar a estas oficinas todos los casos de violencia doméstica y asaltos sexuales. Cada oficina contaba con psicólogos profesionales de planta para asesorar y aconsejar a las víctimas de la violencia, y evaluar la amenaza del potencial peligro asociado a una queja. Estas oficinas tenían la autoridad para emitir órdenes temporales de alejamiento/restricción inmediatamente después de recibir quejas, y servir de mensajeros de las víctimas para evitar el contacto entre la víctima y el agresor. Las organizaciones de mujeres expresaron sus preocupaciones en el sentido de que el número de oficinas era insuficiente.

En un paso adicional para abordar el problema, la Procuraduría General les instruyó a todos sus oficiales en todo el país a no conciliar los casos de violencia contra la mujer, y continuar los procesos judiciales – aún en aquellos casos donde las víctimas hubieran retirado los cargos. Se les ordenaba a los fiscales brindar asistencia y protección a las víctimas de la violencia, refiriéndolas a las instituciones correspondientes para asesoría legal, médica y psicológica. Además, la Procuraduría General instruyó a todos sus oficiales que las investigaciones y la presentación de cargos debían ser concluidas dentro de 35 días, a menos que el caso se considerara como complejo.

La Oficina para la Atención a Mujeres y la Violencia Intra-Familiar integró a docenas de miembros de la policía recién graduados y entrenados por la ONG Profamilia, y por la Procuraduría General de la República. La oficina, encabezada por la Coronel Teresa Martínez, fue enlazada con las líneas para llamadas de emergencia, para facilitar los servicios de respuesta rápida. Actualmente las líneas para llamadas de emergencia están conectadas al recién

implementado Sistema 911 de Respuesta a Emergencias. Según el Ministerio de la Mujer, el Sistema de Emergencias 911 recibió 386 llamadas telefónicas asociadas a la violencia doméstica desde su inauguración en mayo hasta el 15 de octubre. El sistema prestaba servicio solamente a Santo Domingo y las zonas colindantes. La Oficina para la Atención a la Mujer y la Violencia Intra-Familiar tiene un oficial entrenado de la policía en seis de las 17 oficinas satélites de la unidad para la prevención y atención a la violencia. En casos de violencia, los oficiales están autorizados a penetrar al domicilio de la víctima sin una orden judicial, para brindarle protección a la víctima. Durante el año la oficina entrenó aproximadamente 5,000 miembros de la policía en asistencia a las víctimas de la violencia de género.

El Ministerio de la Mujer, cuyos recursos son escasos, promovió activamente la igualdad, y la prevención de la violencia contra la mujer, implementando programas de educación y concientización y de entrenamiento, a otros ministerios y oficinas del gobierno. El ministerio también promovía mayores niveles de participación femenina en la vida política del país.

El gobierno y varias ONGs llevaron a cabo programas de acercamiento y capacitación sobre la violencia doméstica y los derechos legales. El Ministerio de la Mujer operaba dos refugios para sobrevivientes de la violencia doméstica, en lugares no revelados donde personas abusadas podían dar los reportes a la policía y recibir asesoramiento. Los refugios le brindaban a las mujeres asistencia de corto y mediano plazo de hasta tres meses para escaparse de situaciones de violencia. El Ministerio tiene presencia en 31 oficinas provinciales y 21 oficinas municipales donde ofrece a las víctimas asistencia gratuita psiquiátrica y asesoría legal. El Ministerio también opera dos programas para rehabilitar a personas condenadas por abuso doméstico o violencia de género.

Las ONGs declararon que, a pesar de poder contar con leyes adecuadas, la respuesta por parte de la fuerza pública no era efectiva en la prevención de la violencia de género. El sistema carece de un enfoque integral a la asistencia a la víctima, el sistema judicial carecía de recursos para perseguir y enjuiciar exitosamente a los agresores, y el número de refugios para mujeres era inadecuado para las necesidades de las víctimas. En agosto el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, declaró en una conferencia de prensa que la campaña del gobierno para reducir la violencia de género y los feminicidios había arrojado pobres resultados, pero prometió que los esfuerzos del gobierno continuarían.

Mutilación/Corte de Genitales Femeninos (FGM/C): Ninguna ley prohíbe la FBM/C. La práctica es virtualmente inexistente en el país.

Acoso Sexual: El acoso sexual en el trabajo constituye un delito y lleva un castigo de un año de prisión y una multa igual a la suma de tres a seis meses de salario; sin embargo, líderes sindicales reportaron que la ley no estaba siendo ejecutada, y que el acoso sexual seguía siendo un problema. La Procuraduría General reportó que el acoso sexual era particularmente frecuente en las zonas francas industriales (FTZs).

Derechos Reproductivos: Las parejas y los individuos tenían el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos, intervalos cronológicos y tiempo para tenerlos, y en general poseen los medios de hacerlo libres de discriminación, coerción y violencia. Cuando

hubo disponibilidad, se suministraron anticonceptivos gratuitos; sin embargo, muchas mujeres de bajos ingresos los usaban de manera inconsistente debido a la irregularidad en el suministro por parte de las agencias gubernamentales. Existen prejuicios sociales y prohibiciones religiosas contra el uso de métodos modernos de planificación familiar. La Encuesta Demográfica y de Salud del 2013 indicaba que el 69 por ciento de las mujeres entre las edades de 15 y 49 años usaban un método moderno anticonceptivo. El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud reportó 183 muertes maternas en el 2013 – ocho más que en el 2012. Un estudio por las ONGs Colectiva Mujer y Salud, Oxfam, y Ciudadanía Activa de Las Mujeres, estimó la relación de mortalidad materna en 181 por 100,000 nacidos vivos en el 2013. Aunque la DHS estimaba que el 99 por ciento de los partos fueron asistidos por personal sanitario capacitado, había mujeres con acceso limitado a atenciones adecuadas, sobre todo mujeres de ascendencia haitiana.

Una elevada tasa de embarazos entre adolescentes sigue siendo motivo de preocupación. En el 2013 UNFPA estimaba que el 22 por ciento de las adolescentes habían estado embarazadas. Las elevadas tasas de embarazo contribuyeron al alto nivel de mortalidad materna: UNFPA encontró que el 19 por ciento de las muertes maternas ocurrieron entre adolescentes. Otros factores importantes que inciden a las muertes maternas y neonatales son la deficiente calidad de cuidado/atención y la falta de acceso a servicios de salud, así como las complicaciones durante el embarazo y el parto. La política del gobierno no limita el acceso a los anticonceptivos, ni la asistencia capacitada de salud durante el embarazo y el parto, ni atenciones médicas de emergencia para las complicaciones derivadas del aborto, aunque el aborto es ilegal. La mayoría de las mujeres recibieron alguna atención pos-natal, aunque la falta de atenciones pos-natales era mayor entre mujeres jóvenes sin educación académica, y aquellas de los quintiles económicos más bajos.

Discriminación: Aunque la ley dispone que las mujeres y los hombres gozan de los mismos derechos legales, las mujeres no disfrutaban de un status social y económico ni de la igualdad de oportunidades en la misma medida que los hombres. Los hombres ocupaban aproximadamente el 70 por ciento de posiciones de liderazgo en todos los sectores. Solamente el 11 por ciento de las empresas tenían a mujeres como gerentes superiores. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en promedio las mujeres recibieron un 16 por ciento menos en el pago o remuneración que los hombres en posiciones de igual contenido y que exigían las mismas capacidades. En 2013 la tasa promedio de desempleo entre hombres era de un 9.9 por ciento de la fuerza laboral activa, versus un 16 por ciento para las mujeres. Algunos empleadores supuestamente administraban pruebas de embarazo a las mujeres antes de contratarlas, como parte de un examen médico obligatorio. Aunque es ilegal discriminar en base a dichas pruebas, las ONGs líderes reportaron que muchas veces los empleadores no contrataban a mujeres embarazadas, y a veces despedían a empleadas que salían embarazadas. No hubo programas gubernamentales efectivos para combatir la discriminación económica contra la mujer (ver la sección 7.d.).

Hijos/Hijas

Registro de Nacimiento: Se adquiere la ciudadanía mediante el nacimiento dentro del país, con la excepción de los hijos nacidos de diplomáticos, o de las personas “en tránsito,” o de padres

que se encuentran ilegalmente en el país (ver la sección 2.d.). Un hijo/hija nacido en el extranjero de un padre y una madre dominicanos también puede adquirir la ciudadanía. Un hijo/hija que no se registre al nacer se define como indocumentado hasta que se haga una declaración tardía, para la cual existen limitaciones. Según la DHS del 2013, el 16 por ciento de los niños entre las edades de uno a cuatro años, el 10 por ciento de los niños entre las edades de cuatro y nueve años, y el 5 por ciento de los niños entre las edades de 10 y 14 años no estaban registrados.

Educación: La Constitución dispone una educación libre, obligatoria y pública hasta la edad de 18 años. Esta disposición no siempre se cumple, y la falta de documentación o la discriminación a los niños y niñas de ascendencia haitiana impide el acceso de muchos niños a la educación primaria. Una vez los niños lleguen a la secundaria, se requiere documentación legal para poder inscribirse en la escuela, lo que impidió que muchos niños asistieran o completaran sus estudios. A muchos niños que carecían de documentos, principalmente los haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana, se les dificultaba asistir a la escuela secundaria (después del octavo curso) y enfrentaron problemas para acceder a otros servicios públicos. Según UNESCO, el 89 por ciento de los niños/niñas de edad de primaria estaban inscritos en escuelas primarias en el 2012.

Abuso Infantil: El abuso de niños/niñas, incluyendo el abuso físico, sexual y psicológico, constituye un problema grave. La Procuraduría General tiene una Unidad especial para Niños/Niñas y Adolescentes, que mantiene una línea telefónica directa donde las personas pueden llamar para reportar casos de abuso infantil. Pocos de estos casos llegaron hasta los tribunales, debido al temor a la vergüenza familiar, falta de recursos económicos, o falta de conocimiento acerca de la disponibilidad de asistencia legal. La fiscalía de Santo Domingo reportó que en la mayoría de los casos de abuso, el acusado era una persona cercana al niño/niña, como por ejemplo un pariente o amigo íntimo de la familia. La Procuraduría General reportó que hasta julio había recibido más de 1,500 quejas de casos de estupro y 335 casos de incesto. La Procuraduría General expresó su preocupación acerca del aumento del 1000% en casos reportados de incesto durante 2013, pero hasta diciembre todavía se investigaban las potenciales causas. La ley dispone el retiro de un niño o niña maltratada hacia un ambiente protegido.

Observadores locales informaron que no se estaban reportando todo los casos de abuso infantil debido a la creencia generalizada de que estos problemas deben ser tratados dentro del hogar. La ley contiene disposiciones que se refieren al abuso infantil, incluyendo el maltrato físico y emocional, la explotación sexual, y el trabajo infantil. La ley dispone sanciones de dos a cinco años de prisión y una multa de tres a cinco veces el sueldo mínimo a las personas que sean declaradas culpables del abuso de un menor de edad. La sanción se duplica si el abuso está asociado al tráfico y trata de personas. La oficina gubernamental Dirección Nacional para la Asistencia a Víctimas coordinó los esfuerzos de entidades oficiales y ONGs para asistir a niños que fueran víctimas de la violencia y el abuso.

Matrimonio Temprano y Obligado: La edad mínima legal para el matrimonio con consentimiento de los padres es 16 años para el hombre y 15 para la mujer. Según los últimos datos disponibles de la ONU, aproximadamente el 40 por ciento de las mujeres entre las edades de 20 y 24 años se habían casado antes de cumplir los 18 años; más del 33 por ciento se habían casado antes de cumplir los 15 años, mientras que sólo el 9 por ciento de los adolescentes

masculinos se habían casado antes de cumplir los 18 años. Las niñas muchas veces se casaban con hombres mucho mayores. El matrimonio de niños/niñas era muy frecuente entre niñas pobres, con poca educación, y viviendo en zonas rurales. Por lo menos la mitad de las mujeres más pobres se casaban por primera vez o tenían una pareja antes de los 17 años, en comparación con las mujeres más ricas (21 años).

Mutilación/Corte de los Genitales Femeninos (FGM/C): Ninguna ley prohíbe la FGM/C, y la práctica es virtualmente inexistente en el país.

Explotación Sexual de Niños/Niñas: La ley define el estupro como relaciones sexuales con una persona menor de 18 años. Las sanciones por estupro son de 10 a 20 años de prisión y una multa de 100,000 a 200,000 pesos (\$2,278 a \$4,556). La ley también contiene disposiciones específicas que prohíben la pornografía y prostitución infantil, estableciendo castigos/sanciones por el abuso sexual de niños de 20 a 30 años de prisión y multas de 100,000 a 200,000 pesos (\$2,278 a \$4,556). Los medios de comunicación reportaron frecuentes casos de pedofilia. El Vaticano destituyó y expulsó al antiguo arzobispo Jozef Wesolowski, Nuncio Apostólico ante la República Dominicana, en agosto del 2013, por supuesto abuso sexual de menores.

La explotación sexual comercial de niños ocurre generalmente en las zonas turísticas y las principales zonas urbanas. El gobierno llevó a cabo varios programas para combatir la explotación sexual de menores, incluyendo avisos en aeropuertos y programas enfocados en lugares populares turísticos. El Ministerio de Trabajo continuó un programa para combatir la explotación en destinos turísticos populares como por ejemplo Boca Chica, Sosúa, y Las Terrenas. Estos programas brindaron apoyo psicológico y asistencia médica, al regreso de niños/niñas a las aulas, y reunía a niños con sus familias y comunidades cuando era posible. Los programas también brindaban asesoría legal a niños víctimas y a sus familias para poder apresar y condenar a los explotadores.

Niños y Niñas Desplazados: Había una gran población de niños viviendo en las calles, en su mayoría haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana (ver la sección 2.d.). Un problema que continuó fue la trata de niños haitianos en la República Dominicana.

Ver el *Reporte de Tráfico y Trata de Personas* del Departamento de Estado en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt.

Secuestros Internacionales de Niños: El gobierno es signatario de la Convención de la Haya del 1980 sobre el Secuestro Internacional de Niños y Niñas. Para información ver el reporte del Departamento de Estado sobre cumplimiento en <http://travel.state.gov/content/childabduction/english/legal/compliance.html> e información específica del país en <http://travel.state.gov/content/childabduction/english/country/dominicanrepublic.html>

Anti-Semitismo

La comunidad judía está compuesta de aproximadamente 300 a 350 personas. No hay reportes de actos anti-semíticos.

Tráfico y Trata de Personas

Ver el *Reporte de Tráfico de Personas* del Departamento de Estado en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt.

Personas con Discapacidades

Aunque la ley prohíbe la discriminación contra personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales, estos individuos enfrentaban discriminación en el empleo y en la obtención de otros servicios. La ley dispone el acceso físico para personas con discapacidades a todo nuevo edificio público y privado, y el acceso a los servicios básicos. También especifica que cada ministerio debe colaborar con el Consejo Nacional de Discapacidad para implementar estas disposiciones. Las autoridades trabajaron para hacer cumplir estas disposiciones, pero persiste un vacío en su implementación. Muy pocos edificios públicos estaban dotados de pleno acceso.

En julio el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones construyó un contén y acera a lo largo de una calle principal, que recibió cobertura negativa en los medios de comunicación. El contén con diez pulgadas de altura y tres millas de largo y con sólo cinco rampas de acceso a sillas de rueda, principalmente dirigidas al uso vehicular hizo difícil que personas con discapacidad en movilidad pudieran usar la vía. El ministerio explicó que la altura excesiva del contén estaba diseñada para evitar que los vehículos se estacionaran en la acera, indicando así la falta de consideración para las personas que serían afectadas por el proyecto.

La Asociación Dominicana de Rehabilitación recibió el apoyo del Ministerio de Salud Pública y de la Presidencia para brindar asistencia en rehabilitación a personas con discapacidades físicas y de aprendizaje, y en la administración de las escuelas para niños con discapacidades físicas y mentales. La Asociación citó la falta de transporte público accesible para personas con discapacidades como el mayor impedimento.

La ley dispone que el gobierno garantice que personas con discapacidades tengan acceso al mercado laboral así como a las actividades culturales, recreativas y religiosas, pero esto no se implementa de manera consistente (ver la sección 7.d.). Personas con discapacidades asistían a la escuela a todos los niveles; sin embargo, los recursos para cumplir con sus necesidades específicas muchas veces no eran suficientes tanto en términos de infraestructura como de materiales accesibles. Un estudio de la UNESCO del 2012 reportó que el 70 por ciento de los niños/niñas con discapacidades no asistían a la escuela. El Centro Integral de la Niñez de Santo Domingo, inaugurado en noviembre del 2013 por la Primera Dama, Cándida Montilla de Medina, asistió a 200 niños y niñas durante el año. Varios otros centros seguían bajo construcción durante el año.

La discriminación contra personas con discapacidades mentales era común en todos los sectores públicos y privados. Se dedicaron pocos recursos a aquellas personas con discapacidades mentales.

Minorías Nacionales/Raciales/Étnicas

Hubo importante evidencia de prejuicio racial y discriminación contra personas de tez oscura, pero el gobierno rechazaba la existencia de tal prejuicio o discriminación, y por consiguiente hizo poco para abordar el problema.

También había fuertes prejuicios contra haitianos, lo que perjudicaba a muchos haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, además de otros extranjeros de tez oscura. Los oficiales seguían negando los servicios básicos de educación salud, y documentación a personas de ascendencia haitiana. Pocos oficiales gubernamentales reconocían la existencia de esta discriminación; otros de manera sistemática y pública negaban su existencia.

ONGs locales reportaron incidentes donde a personas de tez oscura se les negaba el acceso o servicios en bancos, servicios en restaurantes y tiendas, ingreso a clubes nocturnos, inscripción en colegios privados, y registro de nacimiento en los hospitales. También se les negaban oportunidades económicas a las personas de tez oscura bajo el requerimiento de una “buena presencia” (ver la sección 7.d.).

Los haitianos seguían inmigrando al país en búsqueda de oportunidades económicas y asistencia. La DGM reportó que no hubo deportaciones durante el año, pero haitianos que intentaban ingresar ilegalmente eran devueltos a Haití. Algunas de las personas devueltas del país reportaron que se les negaba la oportunidad de expresar un temor creíble de persecución o tortura si regresaban a Haití.

Algunos inmigrantes haitianos y otros vivían en grupos de casuchas de barrios marginados o colonias azucareras conocidas como bateyes. Igual que en muchas otras zonas pobres del país, éstos son ambientes toscos con poca o ninguna electricidad, ni agua potable, facilidades sanitarias ni educación adecuada. En muchos bateyes la asistencia médica era rudimentaria o no había disponibilidad de la misma, ni de agua limpia de manera permanente. Muchos residentes de los bateyes, careciendo de documentación, se sienten tener pocas alternativas que no sea la de quedarse en sus comunidades, donde se sentían relativamente seguros contra los riesgos de deportación y acoso existente en otras partes del país.

Actos de Violencia, Discriminación y Otros Abusos Basados en la Orientación Sexual e Identidad de Género

El trato a lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros (LGBT) va desde una tolerancia ambivalente hasta la homofobia empedernida. No existe una legislación específica que proteja al individuo contra la discriminación por su orientación sexual o identidad de género. En mayo un proyecto de ley que regula el matrimonio y la familia fue interpretada por los medios de comunicación como respaldo a la legalización de matrimonios gay en el país. Como resultado, unos 18 senadores retiraron su apoyo al proyecto de ley, efectivamente eliminándolo. La constitución define el matrimonio como una relación exclusivamente entre un hombre y una mujer, y no les concede los mismos derechos que disfrutaban las parejas heterosexuales cohabitantes, a parejas del mismo sexo cohabitando. La ley prohíbe la discriminación por la orientación sexual e identidad de género para oportunidades de desarrollo de los jóvenes.

ONGs reportaron amplia discriminación en áreas tales como atención médica, educación, justicia y empleo (ver la sección 7.d.). Individuos LGBT muchas veces confrontan intimidación, acoso, y *bullying*. Grupos religiosos realizaron concentraciones contra la comunidad LGBT. El 22 de julio la Comunidad Evangélica Nacional realizó una concentración en apoyo a los “valores de la familia” y para protestar contra la promoción de valores LGBT. Cuando se les preguntó si se deben tomar medidas legales para proteger a personas LGBT contra la discriminación, un 54 por ciento se opuso a las medidas, mientras que un 46 por ciento las apoyó. En agosto una encuesta de la empresa Gallup determinó que un 73 por ciento de los encuestados dijeron que había discriminación social contra la comunidad LGBT. En junio el jefe de la policía, Castro Castillo, declaró públicamente que no aceptaría a personas homosexuales en la policía nacional, porque, según él, así lo confirma la ley.

Según ONGs LGBT, individuos transexuales y lesbianas estaban particularmente en riesgo de convertirse en víctimas de la discriminación. Entre diciembre 2013 y octubre 2014 el Observatorio de los Derechos Humanos para Grupos Vulnerables recibió 39 reportes de abuso policial por arresto arbitrario, violencia policial, y extorsión, de los cuales 17 eran trabajadoras sexuales transexuales. ONGs reportaron que personas LGBT eran renuentes a presentar cargos o quejas de manera oficial por temor a represalias o humillaciones. En situaciones donde personas LGBT presentaron quejas, muchas optaron por retirarlas. La comunidad transexual reportó discriminación y violencia generalizadas. Según las ONGs, el sistema judicial no persiguió y enjuició 25 crímenes cometidos contra trabajadoras sexuales transexuales.

En agosto la organización Trans Always Friends depositó una queja ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, alegando que la policía había abusado de Verónica, una de sus promotores de salud-pública transexual. Mientras Verónica asistía a un carnaval en Santo Domingo con otros amigos/amigas transexuales, un joven supuestamente intentó atracarla con un cuchillo. Cuando llegó la policía, arrestaron a Verónica. La víctima reportó que la policía la tiró al suelo, le pisaron la cabeza, le cortaron el pelo con tijeras, la insultaron por ser transexual, y la encerraron en una celda llena con otros presos, gritándoles que hicieran lo que quisieran. Hasta noviembre el caso seguía bajo investigación.

Según varios reportes, individuos LGBT fueron arrestados sin motivo, no eran contratados, se les negaba el acceso a alquilar o comprar residencias, y se les negaba el acceso a servicios de salud. ONGs LGBT reportaron que la discriminación y los ataques eran más frecuentes fuera de Santo Domingo. ONGs reportaron varios casos de estudiantes LGBT expulsados de la escuela sin motivo legítimo. Los miembros de la comunidad LGBT reportaron que se les seguía negando servicios de salud en hospitales tanto públicos como privados. Según una encuesta realizada en junio por la Universidad INTEC en los hospitales públicos de Puerto Plata, Dajabón y Montecristi, el 25 por ciento de los trabajadores de la salud dijeron que preferían no prestar servicios a personas transexuales. ONGs reportaron que en septiembre una persona transexual, de nombre Alexis, fue apuñalado en los glúteos en el festival El Dean en Monte Plata. Alex procuró atención médica en el hospital de Monte Plata. Supuestamente, al principio se negaban asistir a la víctima, y luego el personal médico del hospital cosió la herida de Alexis y lo despachó a su casa. Alexis se murió la mañana siguiente. La policía abrió una investigación que seguía abierta en diciembre.

Aunque se concedían permisos oficiales para que individuos LGBT hicieran actividades en espacios públicos, estos permisos muchas veces conllevaban condiciones especiales que impedían que las organizaciones LGBT celebraran sus eventos. Los miembros de la comunidad LGBT frecuentemente se reunían de manera informal en espacios públicos, sobre todo el Parque Duarte de la zona colonial de Santo Domingo. Sin embargo, en general las actividades formales de las organizaciones LGBT estaban sujetas a la aprobación de la Junta de Vecinos, una institución influenciada por la Iglesia Católica y por las opiniones conservadoras de ésta respecto a temas LGBT.

En junio, por el cuarto año consecutivo, la comunidad LGBT celebró con éxito un desfile de orgullo gay y un concierto de solidaridad, durante el cual la sociedad civil y las organizaciones LGBT exigían respeto a sus derechos humanos y solicitaban que las autoridades descontinuaran sus prácticas discriminatorias. Los participantes confrontaron alguna resistencia por parte de la policía durante el desfile.

Entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre la comunidad LGBT celebró el Outfest Santo Domingo, el cuarto festival anual internacional y cinematográfico LGBT. El festival, que pretendía promover los derechos humanos y la coexistencia social, fue organizado por una red de voluntarios con el apoyo de varias organizaciones locales e internacionales.

Estigma Social por VIH y SIDA

Según la ONUSIDA aproximadamente 46,000 personas con VIH/SIDA viven en el país. En la encuesta demográfica y sanitaria del 2013, el 50 por ciento de las mujeres y el 57 por ciento de los hombres reportaron haber confrontado actitudes discriminatorias hacia personas que viven con HIV. Las personas con VIH/SIDA confrontan discriminación, sobre todo en el lugar de trabajo.

Las personas con VIH/SIDA con regularidad encuentran discriminación en el acceso a atenciones de salud y empleo (ver la sección 7.d.). ONGs reportaron que trabajadores de la salud discriminaban contra pacientes con VIH/SID. Según una encuesta realizada en junio por la Universidad INTEC en los hospitales públicos de Puerto Plata, Dajabón y Montecristi, el 29 por ciento de los trabajadores de la salud dijeron que preferirían no prestarles servicios a personas transexuales. Esta discriminación impide que personas se hagan la prueba de VIH/SIDA o reciban servicios preventivos y tratamiento. Aunque la ley prohíbe el uso de pruebas VIH para depurar la contratación de empleados, Human Rights Watch, AI y la Organización Internacional de Trabajo (OIT) reportaron que trabajadores en varios sectores han tenido que someterse a pruebas obligatorias de VIH. A veces se les hacen las pruebas sin su conocimiento ni consentimiento. Muchos trabajadores o pacientes que dieron positivo por la enfermedad no fueron contratados, fueron despedidos de sus empleos, o se les negaban atenciones adecuadas de salud.

En julio la Suprema Corte ratificó el fallo contra la Compañía de Electricidad EDEESTE por despedir a un empleado por haber dado positivo en una prueba de HIV. El tribunal dictaminó

que EDEESTE debía reintegrarle al empleado a su trabajo y pagarle dos millones de pesos (\$45,570) en daños más sus gastos legales.

El Consejo de SIDA del Poder Ejecutivo, el cual incluye miembros de los sectores público y privado y personas que han dado positivo de VIH/SIDA, coordina la política a nivel nacional y coopera con ONGs locales para reducir el impacto de VIH/SIDA para las poblaciones vulnerables y la sociedad. El Ministerio de Salud también fundó ONGs y organizaciones privadas como por ejemplo el Centro de Orientación e Integración, que trabaja para combatir la discriminación y ayudar la integración a la sociedad.

Otro Tipo de Violencia o Discriminación Social

En varias ocasiones ciudadanos atacaron y a veces mataban a supuestos criminales en represalias de tipo “vigilante” por robo, hurto, o atraco. Observadores atribuían estos incidentes a un aumento en el nivel de criminalidad y la incapacidad percibida de la fuerza pública de frenar o combatir incidentes de criminalidad.

Sección 7. Derechos Laborales

a. Libertad de Asociación y el Derecho de Negociación Colectiva/Sindical

La ley dispone el derecho de los trabajadores, con la excepción de los militares y la policía, de crear e integrarse en sindicatos independientes, realizar huelgas legítimas, y celebrar negociaciones colectivas; sin embargo, impone varias restricciones a estos derechos. Por ejemplo, los derechos sindicales están limitados por el requisito de que el sindicato debe representar el 50 por ciento más uno de los trabajadores en una empresa para poder celebrar negociaciones colectivas, requisito considerado como excesivo por la OIT. Además, la ley estipula que no se puede convocar una huelga hasta que se hayan cumplido los requisitos de mediación obligatoria.

Aunque la ley exige que para que los sindicatos sean legítimos, deben estar registrados en el Ministerio de Trabajo, ordena el reconocimiento automático del sindicato en el caso de que el Ministerio no haya respondido a la solicitud dentro de un plazo de 30 días. La ley permite que los sindicatos hagan sus actividades sin interferencia del gobierno. Se permite que los empleados del sector público constituyan asociaciones registradas a través de la Oficina de Administración Pública. La ley exige que el 40 por ciento de los empleados públicos se comprometan a hacerse miembros del sindicato en una entidad gubernamental específica para que el sindicato pueda creado. Según el Ministerio de Trabajo, la ley se aplica a todos los trabajadores en el país incluyendo a los trabajadores extranjeros, trabajadores domésticos, trabajadores que carecen de documentación legal, y trabajadores de las FTZs.

Los requisitos formales para que una huelga sea considerada como legítima incluyen el apoyo de una mayoría absoluta de todos los empleados de la empresa, un intento previo de resolver el conflicto a través de la mediación, una notificación escrita al Ministerio de Trabajo, y un período de espera de 10 días después de la notificación, antes de proceder a realizar la huelga. No se permite que los empleados públicos y el personal de servicios públicos esenciales participen en

actividades sindicales, incluyendo formar parte de un comité que gestione la creación de un sindicato.

El gobierno aplicó las leyes de manera inconsistente en relación a la libertad de asociación y la negociación colectiva. Los castigos bajo la ley por prácticas laborales desleales que violan la libertad de asociación van de siete a 12 veces el sueldo mínimo, y podría aumentar en un 50 por ciento si el empleador repite el acto. El incumplimiento con un acuerdo de negociación colectiva puede ser castigado con una multa equivalente de tres a seis veces el sueldo mínimo. Dichas multas eran insuficientes para desincentivar a los empleadores a que violaran los derechos laborales, y raras veces fueron ejecutadas. Los inspectores laborales no investigaban de manera consistente las acusaciones de violaciones a la libertad de asociación y los derechos de negociación colectiva. Por ejemplo, en el sector azucarero, los inspectores laborales supuestamente no les preguntaban a los trabajadores y supervisores acerca de temas asociadas a la libertad de asociación, el derecho a organizarse, la membresía o participación en un sindicato o negociaciones colectivas, aunque trabajadores individuales han reportado algunos casos de empleadores que les amenazan con despedirlos o quitarles su vivienda en caso de que se asocien con sus compañeros de trabajo.

El proceso para manejar disputas a través de los tribunales laborales muchas veces era largo, y algunos casos siguieron pendientes durante años. ONGs y federaciones laborales reportaron que las empresas se aprovechaban de la lentitud y falta de efectividad del sistema legal para apelar casos, lo que dejaba a los trabajadores en el ínterin sin la protección de sus derechos laborales. No se respetaban de manera consistente la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. Durante el año hubo reportes de intimidación, amenazas, y chantaje por parte de empleadores para evitar actividades sindicales. Por ejemplo, los sindicatos reportaron que una empresa local despidió a José Vásquez Beltrán por encabezar actividades sindicales. Durante la noche el gerente de recursos humanos y dos guardianes de seguridad armados supuestamente penetraron el hogar de Vásquez y lo asaltaron delante de su familia. Al fin del año la oficina del Procurador General en Monte Plata estaba investigando el caso; sin embargo, el sindicato alegaba que no se había logrado ningún avance en el caso debido a la complicidad entre la empresa y el tribunal. Algunos sindicatos exigían que los miembros entregaran documentos de su status legal para poder participar en el sindicato, a pesar de que todos los trabajadores en el territorio están cubiertos por el código laboral sin tomar en cuenta su status legal.

ONGs laborales reportaron que la mayoría de las empresas se resistían a las prácticas de negociación colectiva y actividades sindicales. Se alegaba que las empresas despedían a trabajadores por actividades sindicales y ponían en una lista negra a sindicalistas, entre otras prácticas anti-sindicales. Por ejemplo, líderes sindicales alegaban que una empresa le pagó a un juez 700,000 pesos (\$16,000) para fallar en el sentido de que la empresa podía revocar la inmunidad de un líder sindical, y luego podía despedirlo. La Asociación Dominicana de Controladores de Tráfico Aéreo reportó que el Director General del Instituto Nacional de Aviación Civil (IDAC) presionó a miembros de la Asociación a que renunciaran, y despidió a 31 de sus miembros. Un tribunal laboral dictaminó en junio que la autoridad de aviación debía volver a contratar a 11 de estos trabajadores, pero el director general de aviación se negó a cumplir con el fallo y presentó una demanda en el Tribunal Constitucional (TC) contra los mismos empleados por concepto de “indisciplina.” En diciembre el TC falló a favor de IDAC y

rechazó la orden del tribunal inferior de volver a contratar a los 11 trabajadores. Era frecuente que a los trabajadores se les pidiera firmar documentos comprometiéndose a abstenerse de participar en actividades sindicales. Las empresas también creaban y apoyaban a sindicatos “amarillos” o respaldados por la empresa, para contrarrestar los sindicatos libres y democráticos. Las huelgas formales no eran una práctica común.

Las empresas seguían aprovechando contratos a corto plazo y subcontratos, lo que dificultaba la organización sindical y las negociaciones colectivas. Pocas empresas tenían pactos de negociación colectiva, en parte porque las empresas creaban obstáculos a la creación de sindicatos, y podían darse el lujo de agotar largos procesos judiciales que los sindicatos nacientes no podían resistir.

La Federación Dominicana de Trabajadores de las Zonas Francas (FEDOTRAZONAS) reportó que la gerencia de varias empresas o sus subcontratistas llevaban a cabo campañas anti-sindicales dentro de sus empresas, incluyendo amenazas de despido a sindicalistas, y que participaban en actividades para evitar que la membresía sindical fuera suficiente para crear derechos de negociación colectiva bajo el código laboral. El Ministerio de Trabajo intervino en algunos casos para brindar servicios de mediación.

FEDOTRAZONAS reportó que los sindicatos eran activos en solamente 35 negocios de las aproximadamente 550 compañías de FTZs, y sólo seis sindicatos habían establecido derechos de negociación colectiva. Los sindicatos en las FTZs reportaron que sus miembros eran renuentes a discutir las actividades sindicales en su lugar de trabajo por temor a perder sus empleos. Los sindicatos acusaron a algunas empresas FTZ de despedir a trabajadores que intentaban organizar sindicatos.

ONGs seguían reportando que muchos obreros haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en los sectores de agricultura y construcción no ejercían sus derechos por temor a ser despedidos o deportados. La presentación del Reporte Público de Evaluación (2011-03) bajo el Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-DR) identificó preocupaciones similares entre los trabajadores del sector azucarero. Varios sindicatos representaban a haitianos que laboran en el sector formal; sin embargo, estos sindicatos no tienen mucha influencia.

b. Prohibición de Trabajo Forzado u Obligatorio

La ley prohíbe toda forma de trabajo forzado u obligatorio. La ley dispone castigos por trabajo forzado hasta 20 años de prisión con multas; dichos castigos eran lo suficientemente estrictos. El gobierno no hacía cumplir estas leyes con efectividad, aunque sí hizo algunos esfuerzos por hacerlo durante el año, incluyendo 13 acusaciones de trabajo forzado entre marzo 2013 y marzo 2014.

Hubo reportes del trabajo forzado de adultos en los sectores de servicios, construcción y agricultura, además de reportes de trabajo forzado de niños y niñas en los sectores de servicio doméstico, vendedores/mendigos callejeros, agricultura y construcción. Por ejemplo, dos estudios recientes identificaron indicadores de trabajo forzado en el sector azucarero, incluyendo

el trabajo forzado de horas extras, deuda inducida, engaño, falsas promesas respecto a los términos del trabajo, y la retención e falta de pago de sueldos.

La falta de documentación y el status legal de los trabajadores haitianos en el país muchas veces los dejaban en una situación de debilidad y vulnerabilidad ante el trabajo forzado. Aunque había pocos datos específicos sobre el tema, supuestamente se reportaba que nacionales haitianos estaban siendo obligados al trabajo forzado en los sectores de servicios, construcción y agricultura.

Ver también el *Reporte de Tráfico de Personas* del Departamento de Estado en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt.

c. Prohibición de Trabajo Infantil y Edad Mínima de Empleo

La ley prohíbe la contratación de niños y niñas menores de 14 años de edad, y pone restricciones al empleo de niños y niñas debajo de los 16 años, limitando su horario de trabajo a seis horas por día. Para aquellos que tienen menos de 18 años, la ley limita el trabajo nocturno y prohíbe el empleo en trabajos peligrosos, como por ejemplo trabajos que involucran sustancias peligrosas, maquinaria pesada o peligrosa, y cargas pesadas. También se prohíbe que el menor de edad trabaje vendiendo alcohol, hagan ciertos trabajos en la industria hotelera, maneje cadáveres, y varias tareas implicadas en la producción de la caña de azúcar, como por ejemplo la siembra, el corte, el porte y levantamiento de la caña, o el manejo del bagazo. Las empresas que emplean a menores de edad están sujetas a multas y sanciones legales.

El Ministerio de Trabajo en coordinación con el Consejo Nacional para Niños, Niñas y Adolescentes (CONANI) es responsable de vigilar por el cumplimiento de las leyes sobre el trabajo infantil. La ley dispone castigos por incumplimiento con las leyes de trabajo infantil, incluyendo multas y prisión. A pesar de que el ministerio y CONANI en general hacía cumplir las regulaciones de manera efectiva en el sector formal, la mano de obra infantil en el sector informal constituyó un problema en gran medida fuera del alcance regulatorio.

El plan del Comité Nacional de Gestión contra el Trabajo Infantil para eliminar las peores formas de trabajo infantil fijó objetivos, identificó prioridades y asignó responsabilidades para combatir la explotación de la mano de obra infantil. Varios programas gubernamentales estaban dirigidos a prevenir el trabajo infantil en la producción del café, tomate y arroz; en ventas callejeras; mano de obra doméstica; y explotación sexual comercial.

En el 2012 el gobierno firmó un acuerdo con la OIT para implementar un proyecto para sacar a 100,000 niños, niñas y adolescentes de trabajo abusivo a través de cuatro años. El acuerdo formaba parte de las metas de la “Hoja de Ruta de la OIT” y para todo otro tipo de mano de obra infantil antes del año 2020, mediante una serie de recomendaciones sobre políticas, incluyendo la colaboración entre agencias, el fortalecimiento de los sectores educación y salud, y la creación de un robusto marco regulatorio.

Sin embargo, el trabajo infantil seguía siendo un problema. La mano de obra infantil estuvo presente principalmente en la economía informal, pequeñas empresas, hogares privados, y el sector agrícola. En particular, hubo reportes de niños y niñas que trabajaban en la producción del ajo, papas, café, caña, tomates, y arroz. Muchas veces los niños acompañaban a sus padres a trabajar en los campos agrícolas. ONGs también reportaron que muchos niños y niñas trabajaban en el sector servicios en varios tipos de trabajo, incluso como servicio doméstico, vendedores callejeros, limpiabotas, y lavando los cristales de automóviles. La explotación sexual comercial de niños y niñas seguía siendo un problema, sobre todo en los populares destinos turísticos y zonas urbanas (ver la sección 6, Niños y Niñas).

Muchos niños y niñas que trabajaban como servicio doméstico eran víctimas del trabajo forzoso. Hubo reportes creíbles de que familias haitianas pobres gestionaban que familias dominicanas “adoptaran” y emplearan a sus hijos. En algunos casos los padres adoptivos supuestamente no trataban a los niños como miembros plenos de la familia, sino que les exigían que trabajaran en el hogar o en algún negocio familiar en vez de asistir a la escuela, lo que resultó en una clase de servidumbre obligada para niños y niñas y adolescentes.

Ver también *Hallazgos sobre las Peores Formas de Mano de Obra Infantil* del Departamento de Trabajo, en www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/.

d. Discriminación Asociada al Empleo u Ocupación

La ley prohíbe toda forma de discriminación, exclusión o preferencia en base a género, edad, raza, color, nacionalidad, origen social, afiliación política o sindical, creencia religiosa, y la discriminación contra personas con VIH/SIDA. El gobierno no hacía cumplir estas disposiciones de manera efectiva. No existe una ley contra la discriminación basada en la preferencia sexual.

Había discriminación en el trabajo con respecto a personas LGBT, sobre todo contra personas transexuales, contra personas que han dado resultados positivos por VIH/SIDA, contra personas con discapacidades, personas de tez oscura, y mujeres (ver también la sección 6). Por ejemplo, la OIT indicó su preocupación respecto al acoso sexual continuo en el lugar de trabajo, y le exhortaba al gobierno a que tomara medidas específicas para abordar los estereotipos existentes sociales y culturales que contribuyen a la discriminación en el país. La discriminación contra trabajadores inmigrantes haitianos ocurre en todos los sectores. Muchos inmigrantes haitianos carecen de status legal de trabajo o residencia, o carecen de documentos, y por consiguiente no tienen pleno acceso a los beneficios incluyendo la seguridad social y cuidados de salud (ver también las secciones 7.b. y 7.e.).

e. Condiciones Laborales Aceptables

Había 14 sueldos mínimos diferentes, dependiendo del sector. El sueldo mínimo para trabajadores de las Zonas Francas era 7,220 pesos (\$170) por mes. El sueldo mínimo de trabajadores fuera de las zonas iba de 6,880 pesos (\$162) a 11,292 pesos (\$265) por mes. El sueldo mínimo del sector público era 5,117 pesos (\$120) por mes. El sueldo mínimo de trabajadores agrícolas era 234 pesos (5.50) por una jornada de 10 horas, con la excepción de

trabajadores de la caña, quienes recibían 146 pesos (\$3.39) por una jornada de ocho horas. Las disposiciones de sueldo mínimo abarcan a todos los trabajadores, incluyendo a los inmigrantes. El Consorcio de Derechos del Trabajador estimaba el salario justo para vivir excedía los 18,000 pesos (\$456) por mes, mientras un grupo de confederaciones laborales calculaba un total “razonable” para una familia de cuatro personas en unos 27,000 (\$635) mensuales. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo usó estadísticas del 2007 en el 2012 para fijar la línea oficial de pobreza en 3,247 pesos (\$75) por mes, determinando que el 43 por ciento de la población vivía en condiciones de pobreza.

La ley fija un período estándar de trabajo de 44 horas por semana, y a pesar de que los trabajadores agrícolas están exentos de este límite, en ningún caso el día laboral puede exceder las 10 horas. La ley estipula que todo trabajador tiene derecho a 36 horas de descanso sin interrupción cada semana. La ley abarca días feriados anuales y requiere el pago de una prima por tiempo extra, aunque la ejecución de esta disposición era inefectiva. La ley prohíbe el tiempo extra excesivo u obligatorio, y declara que el empleado puede trabajar un máximo de 80 horas de tiempo extra en tres meses. El código laboral abarca a trabajadores domésticos pero no les dispone el pago de preaviso, cesantía, ni bonificación. Los trabajadores domésticos tienen derecho a dos semanas de vacaciones pagadas después de un año de trabajo continuo, además de una regalía pascual equivalente a un mes de sueldo. El código laboral también abarca a los trabajadores de Zonas Francas, pero ellos no tienen derecho al pago de bonificaciones.

El Ministerio de Trabajo fija las regulaciones de seguridad y salud laborales. Por regulación el empleador está obligado a protegerle al empleado contra riesgos laborales, y debe asegurar la salud y la seguridad del empleado en todo aspecto asociado al trabajo. Por ley el empleado puede retirarse de situaciones que pongan en peligro la salud o la seguridad sin perjuicio de su empleo, pero en la práctica el empleado no podía retirarse sin riesgo de represalia. No hubo casos donde las autoridades hubieran garantizado el empleo del trabajador que se hubiera retirado por tal situación.

Tanto el Instituto de Seguridad Social como el Ministerio de Trabajo contaban con un pequeño cuerpo de inspectores encargados de hacer cumplir las normas y estándares. El ministerio empleaba unos 186 inspectores laborales, y reportó 4,314 violaciones de las leyes laborales entre enero y octubre. El ministerio recibió 9,178 quejas laborales formales. Los inspectores llevaron a cabo 47,096 inspecciones regulares y 9,178 inspecciones especiales. Los castigos por incumplimiento de pago de sueldos y por violaciones de leyes de seguridad y salud van de tres a seis veces el sueldo mínimo, pero eran insuficientes para impedir las violaciones, y raras veces se hacían cumplir; tampoco el ministerio hacía cumplir siempre las regulaciones de sueldo mínimo. Los trabajadores se quejaban de que los inspectores no estaban bien entrenados, no respondían a sus quejas, y respondían a solicitudes de los empleadores con mayor rapidez que las solicitudes de los trabajadores. Por ejemplo, en el sector azucarero, hubo reportes de fallas de procedimiento o metodología en las inspecciones, incluyendo lo siguiente: hacían entrevistas a pocos o ningún trabajador; casos donde dejaron de discutir con los trabajadores temas asociados al cumplimiento de las leyes laborales; hacían entrevistas de trabajadores en presencia de representantes del empleador; faltaban inspectores con conocimientos de algún idioma, sobre todo el creole, que es necesario para una comunicación efectiva con los trabajadores; falta de seguimiento a las acusaciones de violaciones de las leyes laborales presentadas por trabajadores

durante el proceso de inspección; y falta de inspecciones de seguimiento para verificar el remedio de las violaciones identificadas. FEDOTRAZONAS reportó que el gobierno no monitorea lo suficiente las regulaciones de seguridad y salud laborales, ni sanciona los casos de incumplimiento identificados.

El trabajo obligatorio de tiempo extra seguía siendo una práctica común en las fábricas, y a veces se imponía mediante la falta de pago o empleo para aquellos trabajadores que se negaban a cumplirlo. FEDOTRAZONAS reportó que algunas empresas fijaron programas laborales “cuatro-por-cuatro” donde los empleados trabajan turnos de 12 horas durante cuatro días. En algunos casos a los empleados que trabajaban los programas cuatro-por-cuatro no se les pagaba el tiempo extra por las horas trabajadas en exceso del número máximo de horas laborales que permiten las leyes laborales. Algunas empresas seguían con la práctica de pagar cada ocho días, un salario quincenal con programas de cuatro-por-cuatro, en vez de pagar cada siete días, un salario semanal con un programa estándar de 44 horas. Estas prácticas resultaron en una pérdida de sueldo para los trabajadores, ya que no fueron compensados por las horas extra que trabajaron.

Según un reporte de la OIT publicado en junio, el empleo informal como porción del empleo no-agrícola creció desde un 50 por ciento en 2011 a 51.5 por ciento en 2012. Los trabajadores en la economía informal confrontaban condiciones laborales más precarias que los trabajadores formales, y muchas veces estaban fuera del alcance de los esfuerzos del gobierno de garantizar el cumplimiento.

Las condiciones de los trabajadores agrícolas eran deficientes. Muchos trabajadores trabajaban largas horas, muchas veces 12 horas por día y siete días por semana, expuestos a condiciones laborales peligrosas, incluyendo la exposición a pesticidas, exposición al sol durante largas horas, y el uso de herramientas filosas y pesadas. Algunos trabajadores agrícolas reportaron que muchas veces no se les pagaba el sueldo mínimo de ley. En algunas plantaciones azucareras, a los cortadores se les pagaba según el peso de la caña cortada. Los cortadores de caña seguían sospechando la existencia de fraude por parte de los operadores de las estaciones de pesaje, aunque los oficiales de la empresa lo negaban. La cantidad de caña que podía cortar el cortador variaba, pero la mayoría de los trabajadores jóvenes y fuertes podían cortar entre dos y tres toneladas de caña por día, produciendo un sueldo diario de aproximadamente 160 a 300 pesos (\$3.76 a \$7.05). A los trabajadores menos fuertes, y muchas veces más viejos, se les pagaba solamente por la cantidad de caña que cortaban aún cuando el monto fuera menos que el sueldo mínimo. Durante la temporada muerta de seis meses, muchos de los trabajadores de las plantaciones azucareras se quedaban en sus comunidades trabajando a tiempo parcial despejando terrenos o limpiando la caña, pero no se les pagaba el sueldo mínimo. Además, muchos trabajadores azucareros reportaron que sus empleadores no les proporcionaban equipos básicos de seguridad, incluyendo guantes y botas.

Las empresas no implementaban las regulaciones de seguridad y salud de manera regular. Por ejemplo, en un estudio reciente, la Confederación Nacional de Unidad Sindical reportó condiciones inseguras e inadecuadas de salud y seguridad, incluyendo una falta de ropa de trabajo y equipos de seguridad adecuados; vehículos sin bolsas de aire, botiquines de primeros

auxilios, ventanas que funcionaran de manera adecuada, ni aire acondicionado; ventilación inadecuada en espacios de trabajo; número insuficiente de baños; y áreas inseguras para comer.

Durante el año hubo accidentes que causaron lesiones y la muerte de trabajadores, pero la información sobre el número de accidentes no estaba disponible para el fin del año.